

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

TN/IP/M/2

26 de agosto de 2002

(02-4570)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio  
en Sesión Extraordinaria

## ACTA DE LA REUNIÓN

celebrada en el Centro William Rappard  
el 28 junio de 2002

*Presidente: Embajador Eui-yong Chung (Corea)*

<u>Asuntos tratados:</u>	<u>Párrafos</u>
ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA .....	2-3
CONDICIÓN DE OBSERVADOR DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES .....	3-11
NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS .....	12-144
OTROS ASUNTOS .....	145-146

### A. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. El Consejo de los ADPIC en su segunda Sesión Extraordinaria acuerda adoptar el orden del día que figura en el aerograma WTO/AIR/1817.
2. El Presidente propone que el punto relativo a la condición de observador de las organizaciones intergubernamentales se examine en primer lugar.

### B. CONDICIÓN DE OBSERVADOR DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

3. El Presidente recuerda que, en la reunión de marzo, sugirió que una forma de abordar el punto relativo a la condición de observador en el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria sería conceder la condición de observador a las organizaciones que ya poseían la referida condición en el Consejo de los ADPIC. El Consejo en Sesión Extraordinaria acordó volver a este asunto en junio, a la luz de las disposiciones que podría adoptar el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) en su reunión de 24 de abril. Como el CNC no llegó a un acuerdo, el asunto volvió a los distintos grupos de negociación y a las sesiones extraordinarias. Solicita a las delegaciones que examinen si pueden conceder la condición de observador a las organizaciones intergubernamentales que ya tenían esa condición en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria. Esa sería una medida provisional que se adoptaría en cada reunión hasta que el CNC proporcionara una nueva orientación. Indica además que

la cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es fundamental para encauzar eficientemente los debates del Consejo en Sesión Extraordinaria. Los aportes y conocimientos técnicos especializados de la OMPI permitirán a las delegaciones reflexionar mejor sobre las cuestiones que se han de examinar. Asimismo, propone que, en tanto el CNC o el Consejo General impartan una ulterior orientación, el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria invite a la OMPI a que asista a la próxima sesión a fin de que pueda transmitir información sobre su labor actual o los sistemas que administra, o responder a las preguntas de los Miembros.

4. El Presidente informa a los Miembros que el 18 de abril de 2002 recibió una solicitud de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) en que pedía que se le concediera la condición de observador *ad hoc* en el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria. La solicitud, conjuntamente con sus anexos, se envió por fax a todas las delegaciones participantes en el Consejo en Sesión Extraordinaria. Recuerda que la OIV formuló una solicitud análoga al Consejo de los ADPIC en 1998; desde entonces no se ha adoptado ninguna decisión respecto de esa solicitud ni respecto de las solicitudes de otras organizaciones intergubernamentales.

5. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación no tiene dificultad en que se conceda la condición de observador o que se acepte como observadores a las organizaciones internacionales intergubernamentales a las que se concedió esa condición en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria. Espera asimismo que se logren progresos en lo concerniente a la condición de observador de la OIV, ya que su participación podría ser muy valiosa para las actividades del Consejo en Sesión Extraordinaria. Espera asimismo que se efectúen progresos en lo concerniente a la condición de observador de la OIV, ya que su participación podría ser muy valiosa para las actividades del Consejo en Sesión Extraordinaria.

6. La representante del Canadá dice que su delegación está dispuesta a que se conceda la condición de observador a las organizaciones intergubernamentales que ya tenían esa condición en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria. Su delegación cree que la presencia de la OMPI es muy importante para los trabajos del Consejo. En cuanto a la solicitud de la OIV, el Canadá, lamentablemente, se reserva su posición.

7. El representante del Paraguay dice que su delegación acoge con agrado la sugerencia de que el Consejo en Sesión Extraordinaria conceda la condición de observador a la OMPI por su gran competencia y sus logros. Con respecto a la solicitud de la OIV, dice que esta Organización no tenía la condición de observador en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria y que cualquier concesión futura de esa condición a una organización internacional en esa sesión no puede aplicarse automáticamente al Consejo en Sesión Extraordinaria. La interpretación de su delegación es que la referida concesión depende de la aprobación del propio Consejo en Sesión Extraordinaria.

8. El representante de Hungría apoya la propuesta de la Presidencia de que se acepte como observador en el Consejo en Sesión Extraordinaria a las organizaciones intergubernamentales que ya tenían la condición de observador en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria. Su delegación también respalda plenamente la solicitud de la OIV para obtener la plena condición de observador en el Consejo en Sesión Extraordinaria. Sería lamentable que una organización como la OIV fuera excluida de los debates de este órgano, ya que es evidente la gran importancia que tiene para sus actividades.

9. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación acogería con agrado que se invitara al Consejo en Sesión Extraordinaria a los que ya tienen la condición de observador en el Consejo de los ADPIC, especialmente a la OMPI, porque su participación sería muy útil.

10. El representante de Egipto dice que su delegación también desearía que se concediera la condición de observador a todas las organizaciones interesadas en asistir al Consejo en Sesión

Extraordinaria, sobre todo cuando sean importantes para los trabajos del Consejo en Sesión Extraordinaria, como sucede con la OMPI. Pero el Consejo no puede adoptar una decisión selectiva ni seguir un enfoque selectivo para llegar a una decisión sobre un asunto de carácter sistémico, que se está examinando en el marco global del Consejo General y del CNC en lo que respecta a la labor de los grupos de negociación y las sesiones extraordinarias. Por esa razón, no ve cómo los Miembros podrían, en la presente reunión, tratar de encontrar una salida a ese problema, ya sea procurando tener observadores de diferentes categorías, observadores *ad hoc* o invitados especiales, o mediante cualquier otro mecanismo. Agrega que varios Miembros de la OMC comparten también la posición expresada por su delegación.

11. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria acuerda volver a examinar este punto en su próxima reunión a la luz de las disposiciones que pueda adoptar el CNC o el Consejo General.

C. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

12. El Presidente recuerda que, en la reunión celebrada el 8 de marzo de 2002 por el Consejo en Sesión Extraordinaria, hizo algunas sugerencias sobre la organización y el escalonamiento de los trabajos de las reuniones en Sesión Extraordinaria y tuvo la impresión de que, en general, los Miembros las consideraban útiles. Comprendían dos fases principales: una fase final de negociación de la mecánica, precedida por una primera fase dedicada a continuar el examen de las cuestiones y las ideas ya presentadas, así como de las nuevas que pudieran aportarse. Sugirió que, como parte de esa primera fase, sería conveniente que las delegaciones se propusieran presentar sus principales propuestas a más tardar en la reunión de septiembre de 2002, como una fecha indicativa. Con antelación a la labor basada en las propuestas, sugirió que sería útil que los Miembros realizaran un debate más estructurado y franco. Con ese fin, el 17 de mayo de 2002 realizó una consulta informal abierta para recibir las opiniones de las delegaciones con miras a presentar una nota con anterioridad a la segunda reunión del Consejo en Sesión Extraordinaria, en la que se identificarían varios puntos y temas que los participantes podrían examinar. Al redactar la nota (JOB(02)/49), tuvo en cuenta las opiniones expresadas verbalmente y en documentos escritos, como las comunicaciones presentadas por los Estados Unidos (TN/IP/W/2) y las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (JOB(02)/44). Reitera que la nota fue elaborada bajo su responsabilidad y sin perjuicio de la posición de las delegaciones o del resultado de las negociaciones. Se reconoce que la tarea que tiene ante sí el Consejo en Sesión Extraordinaria es negociar un sistema que constituya un todo integrado y, por consiguiente, puede resultar difícil examinar algunos aspectos con independencia de otros. En consecuencia, las delegaciones deben sentirse con libertad para abordar cualquier asunto pertinente en cada reunión.

13. El Presidente indica que, en su nota, ha identificado cuatro categorías de cuestiones para que sean examinadas en la presente reunión. Propone examinarlas una por una, en el orden de la nota. Si algunas delegaciones desean plantear otras cuestiones distintas de las cuatro categorías identificadas, tendrán la oportunidad de hacerlo en el marco de un quinto punto: "Otras cuestiones". Desearía dar a cada delegación la oportunidad de exponer cabalmente su posición. No obstante, debido a las limitaciones de tiempo, sugiere que se eviten los debates y las declaraciones generales y pide, en cambio, a las delegaciones que se centren en la presentación concreta de posiciones sobre las cuatro categorías de cuestiones. Expresa la esperanza de que, en el curso de los debates, el Consejo en Sesión Extraordinaria pueda alcanzar cierta convergencia en algunos aspectos de las cuatro categorías enumeradas en su nota.

14. El representante de Australia acoge con agrado el enfoque propuesto por el Presidente. Estima que las cuatro cuestiones planteadas deben centrar las mentes de los participantes en un examen sistemático a fondo de los conceptos básicos y las consecuencias prácticas de un sistema

multilateral. Antes de proceder en la forma propuesta, desea responder a la referencia hecha en el primer párrafo del documento TN/IP/W/3 a los productos comprendidos en el sistema multilateral. Recuerda que en el Consejo en Sesión Extraordinaria sólo se está negociando un sistema multilateral para los vinos y bebidas espirituosas. No se ha conferido ningún mandato para que ese sistema abarque otros productos, ni Australia considera que haya algún interés en ampliarlo a otros productos. En aras de hacer avanzar las cosas, el Consejo en Sesión Extraordinaria debería adherirse al mandato de los Ministros que figura en el párrafo 18 de la Declaración de Doha.

15. Recuerda que, según el punto M del orden del día (examen del párrafo 2 del artículo 24) del Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria, Australia iba a hacer una presentación acerca del cumplimiento de las obligaciones dimanantes de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de indicaciones geográficas. Debido a las limitaciones de tiempo, esa presentación se postergó para la próxima reunión. Por lo que se refiere a la lista de preguntas que las CE han planteado a Australia, acoge con beneplácito el hecho de que los Miembros comiencen a celebrar deliberaciones de fondo sobre la forma en que cumplen las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, sobre cómo distinguen entre la protección prevista en el artículo 22 y la estipulada en el artículo 23. Los Estados Unidos y otros países han planteado, en varias ocasiones, la cuestión de los costos en que han de incurrir los gobiernos, los consumidores y los productores para tener un sistema de registro con arreglo a la propuesta presentada por las CE y otros Miembros. Su delegación también ha comentado la complejidad y la intrusión que puede suponer ese sistema. Da dos ejemplos estadísticos de las consecuencias de la propuesta: el primero, un documento de las CE que contiene unas 200 preguntas formuladas a Australia sobre su sistema de protección de las indicaciones geográficas; y el segundo, las 4.500 (y muy pronto 6.000) indicaciones geográficas de las CE protegidas o registradas de conformidad con la legislación australiana sobre vinos y bebidas espirituosas frente a las 97 indicaciones geográficas australianas.

16. El representante de las Comunidades Europeas dice que los parámetros para el proceso de negociación presentados en la nota del Presidente (JOB(02)/49) permitirán que el Consejo en Sesión Extraordinaria complete su labor a más tardar en la próxima Conferencia Ministerial, como se estipula en el párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Doha y, de ese modo, cumpla el mandato contenido en el párrafo 4 del artículo 23 sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro. Está totalmente de acuerdo con el método propuesto para llevar a cabo las deliberaciones. A fin de contribuir a un debate franco, su delegación ha formulado comentarios escritos en el documento JOB(02)/70 de 24 de junio de 2002, siguiendo la estructura de los puntos y cuestiones identificados en la nota del Presidente. En especial, la sección 3 de ese documento centra su atención en el concepto de indicaciones geográficas. En la sección 4, el documento aborda el objetivo de establecer el registro necesario para facilitar la protección de las indicaciones geográficas. En la sección 5 se hace una referencia detallada a la distinción entre "notificación" y "registro", que no está presente en ninguna de las propuestas hechas por otros Miembros. En la última sección se examina el carácter multilateral del sistema de indicaciones geográficas. Los comentarios concuerdan plenamente con la comunicación presentada por las CE y sus Estados miembros en el documento IP/C/W/107/Rev.1 de 22 de junio de 2000, en el que reseñaron sus ideas básicas sobre la forma que debería tener ese registro multilateral. Recuerda la comunicación que figura en el documento IP/C/W/259, de 31 de mayo de 2001, que contiene un cuadro comparativo de las principales propuestas ya presentadas. Cree que el cuadro sigue siendo una instrumento útil para los debates. Señala también el documento TN/IP/W/3, copatrocinado por Bulgaria, Chipre, las CE y sus Estados miembros, Eslovenia, Georgia, Hungría, Islandia, Malta, Mauricio, Moldova, Nigeria, la República Checa, la República Eslovaca, Rumania, Sri Lanka, Suiza y Turquía. En esa comunicación, los copatrocinantes desean confirmar su compromiso con el objetivo fijado en las propuestas presentadas por las CE y sus Estados miembros (IP/C/W/107/Rev.1) y por Hungría (IP/C/W/255). Están convencidos de que el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria tiene que trabajar con miras a constituir un instrumento válido con efectos jurídicos, que disponga también de un mecanismo para resolver las diferencias que podrían suscitarse una vez que se estableciera el mencionado registro. Al

final de esa comunicación, en el último párrafo, los copatrocinantes apoyan asimismo las opiniones expresadas en la nota informal de las CE y sus Estados miembros (JOB(02)/70).

17. En respuesta a las observaciones formuladas por el representante de Australia, dice que la lista de preguntas de las CE sobre el ordenamiento jurídico de Australia en la esfera de las indicaciones geográficas no tiene por objeto demostrar que la Comunidad y sus Estados miembros están dispuestos a iniciar negociaciones de fondo; pues ya están tratando de hacerlo desde hace varios años. Señala que el debate sobre el registro no debería centrarse en averiguar de qué modo los Miembros han cumplido sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, porque ese no constituye el objetivo del Consejo en Sesión Extraordinaria. A la espera de recibir respuestas completas a las preguntas en la reunión de septiembre del Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria, recuerda que la única razón de las CE para distribuir el cuestionario se debe a que Australia ofreció explicar al Consejo de los ADPIC su ordenamiento jurídico sobre las indicaciones geográficas. En respuesta a una observación planteada por la delegación de Australia sobre el título del documento TN/IP/W/3, señala que la propuesta original de las CE, así como la propuesta presentada hace tres años por los Estados Unidos y otros Miembros, no se refiere a ningún producto específico. Sin duda, eso se dejó deliberadamente en suspenso en ese momento. Indica asimismo que el documento relativo a la extensión que fue presentado en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria también contenía una referencia al registro. Con respecto a una observación formulada por el representante de Australia relativa a la necesidad de examinar los costos que supone el establecimiento de un registro, dice que su delegación espera examinar la cuestión de los costos en la reunión de septiembre, tal como lo indicó el Presidente en su nota (JOB(02)/49). En cuanto al comentario sobre estadísticas o números de indicaciones geográficas, dice que las CE indicarán, en el momento oportuno, al Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria el número de indicaciones geográficas que estima se deben notificar, en nombre de las CE y sus Estados miembros, en el registro multilateral.

18. La representante de la Argentina dice que la nota del Presidente será una muy buena orientación para el debate de fondo. Su delegación se compromete a trabajar positiva y constructivamente durante el curso de estas negociaciones y a esforzarse por lograr alguna forma de acuerdo. En cuanto a la comunicación de las CE y sus Estados miembros (JOB(02)/44), dice que su delegación no puede aceptar la declaración que figura en el preámbulo del documento de que el mandato de la Declaración de Doha "desarrolla un mandato ya existente en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC". El texto del párrafo 4 del artículo 23 excluye expresamente las bebidas espirituosas. Por consiguiente, la Declaración de Doha no puede "complementar" ningún mandato, ya que en ese artículo no se contempla un mandato. Recuerda que la Declaración de Singapur no contiene *per se* ninguna mención explícita de negociaciones relativas al párrafo 4 del artículo 23. El párrafo 19 de esa Declaración dice lo siguiente: "Teniendo presente que un aspecto importante de las actividades de la OMC es la supervisión constante de la aplicación de diversos acuerdos, un examen y actualización periódicos de su programa de trabajo es clave para que la OMC pueda cumplir sus objetivos. En este contexto aprobamos los informes de los diferentes órganos de la OMC .... Estamos de acuerdo con un proceso de análisis e intercambio de información, cuando lo prevean las conclusiones y recomendaciones de los órganos competentes de la OMC, sobre las cuestiones del programa incorporado, que permita a los Miembros comprender mejor las cuestiones de que se trate e identificar sus intereses antes de iniciar las negociaciones y exámenes acordados. Acordamos que: ... los trabajos realizados no prejuzgarán la naturaleza de la actividad acordada (es decir, negociación o examen)." El Informe Anual (1997) del Consejo de los ADPIC (IP/C/12), que fue adoptado por los Ministros en Singapur, menciona en el párrafo 27 lo siguiente: "En su informe (1996), el Consejo acordó iniciar en 1997 la labor preliminar sobre las cuestiones pertinentes a las negociaciones especificadas en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo acerca del establecimiento de un sistema multilateral de notificaciones y registro de las indicaciones geográficas de vinos, y que las cuestiones pertinentes a un sistema de notificación y registro de las bebidas espirituosas formarían parte de esta labor preliminar (IP/C/8)." El párrafo 34 del Informe Anual (1996) del Consejo de los ADPIC dice: "Con respecto a las indicaciones geográficas, el Consejo ha acordado que el examen de la

aplicación de las disposiciones de la sección relativa a las indicaciones geográficas previsto en el párrafo 2 del artículo 24 adopte la forma indicada en el párrafo 27 *supra*, que permite contribuciones de las delegaciones sobre la cuestión del alcance, y el Consejo iniciará en 1997 la labor preliminar sobre las cuestiones pertinentes a las negociaciones especificadas en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC acerca del establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos. Las cuestiones pertinentes a un sistema de notificación y registro de las bebidas espirituosas formarán parte de esta labor preliminar. Toda la labor expuesta *supra* se realizará sin perjuicio de los derechos y obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, en virtud de las disposiciones específicas del programa implícito relativo a los ADPIC." El mismo Informe Anual menciona en su párrafo 28 lo siguiente: "El párrafo 4 del artículo 23 pide al Consejo de los ADPIC que entable negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema, pero no fija plazos para esas negociaciones." A la luz de los textos y las remisiones que preceden, podría considerarse que la Declaración de Doha sólo estableció un plazo para las negociaciones y, en tal sentido, podría concebirse que ha "completado" el mandato preexistente previsto en el párrafo 4 del artículo 23 sobre vinos. Por consiguiente, la Argentina reitera que, si bien no se opone a la inclusión de las bebidas espirituosas en las negociaciones en curso ya que fue la decisión política adoptada por los Ministros en Doha, considera, sin embargo, que se deberá prever en este proceso de negociación la forma de incorporar una obligación específica relativa a un sistema de notificación y registro de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, a fin de que dicha obligación surta la consecuente obligación jurídica para los Miembros signatarios del Acuerdo de Marrakech. Desde esta perspectiva, la comunicación de las CE y sus Estados miembros (JOB(02)/44) ha colocado correctamente entre corchetes el término "bebidas espirituosas". Esa práctica debería mantenerse en toda la documentación del Consejo en Sesión Extraordinaria hasta que se encuentre una solución jurídica con respecto a esa cuestión. La Argentina también está preocupada por la segunda frase del párrafo preambular del documento JOB(02)/44 y una referencia en el mismo sentido en el documento TN/IP/W/3, que declaran que no se debe prejuzgar la cobertura de productos que tendrá el sistema. Esto distorsionaría el alcance de las negociaciones y resulta inaceptable para la Argentina, si se tienen presentes los motivos señalados precedentemente y las declaraciones de nuestra alegación en la primera reunión del Consejo en Sesión Extraordinaria. Para su país, la Declaración de Doha debería permitir centrar las negociaciones en un sistema de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas sin que se incluyan temas ajenos que, han retrasado o impedido avances en las negociaciones del sistema multilateral. Es por ello que sustantivamente, la representante de la Argentina pide que, antes de avanzar en las deliberaciones, el mandato quede claramente acotado. Por último, anuncia que su delegación hará una contribución escrita en el futuro próximo.

19. El representante de Hungría dice que el párrafo 18 de la Declaración de Doha fijó la Quinta Conferencia Ministerial como el plazo para establecer el sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas previsto en el párrafo 4 del artículo 23. La conclusión de las negociaciones, que, a juicio de su delegación, constituye una parte importante del proceso en curso de la reforma agropecuaria, se encuentra muy retrasado. En ese contexto, su delegación desea reiterar el llamamiento a los Miembros a fin de que presenten sus principales propuestas con bastante anticipación a la reunión de septiembre, de modo que el Consejo tenga una oportunidad realista para cumplir su cometido dentro de plazo. Con referencia a la declaración de la Argentina acerca de si el alcance del registro debe abarcar las bebidas espirituosas además de los vinos, el orador dice que no ve ningún problema en esa esfera. El párrafo 18 de la Declaración de Doha proporciona una útil aclaración en el sentido de que el sistema ha de abarcar, además de los vinos, las bebidas espirituosas. Pregunta si la Argentina tendría inquietudes similares con respecto al mandato de la Declaración de Doha sobre la agricultura, que tan convenientemente complementa el artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura. Señala que podría hacerse la misma argumentación y los Miembros no deberán perder de vista el hecho de que los puntos del orden del día no son nuevos. Durante más de cinco años se ha estado negociando el establecimiento de ese sistema. Hay propuestas concretas pendientes, incluso de

su delegación. El examen de éstas no debe confundirse con la revisión del párrafo 2 del artículo 24 que se está haciendo en las reuniones ordinarias del Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria. En cuanto al documento TN/IP/W/3, Hungría concuerda con la declaración formulada por las CE.

20. El Presidente dice que los Miembros tienen un mandato muy claro, conferido por la Quinta Conferencia Ministerial, de negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Propone que los Miembros trabajen en el marco del mandato.

21. La representante de Estonia dice que el nombre de su país puede agregarse a la lista de copatrocinantes del documento TN/IP/W/3.

22. El representante del Japón dice que, al examinar el establecimiento del sistema multilateral, los Miembros deben considerar el trato de las excepciones, en especial la excepción relativa a las marcas de fábrica o de comercio. El Japón es partidario de mantener tal como está la cláusula de excepción, cualquiera que sea el sistema multilateral que se establezca.

23. La representante de Rumania dice que su delegación respalda la contribución de las CE, que proporcionará los instrumentos necesarios para que en el futuro se impida el uso desleal de las indicaciones geográficas. Es evidente que el sistema previsto no reemplazará a los sistemas nacionales. Además facilitaría el acceso a la protección sin crear obligaciones con respecto al nivel de la protección sustantiva; el sistema sólo afectará a las obligaciones procesales que faciliten el acceso de los productores a la protección existente. A juicio de la delegación de Rumania, cada Miembro tiene el deber de proseguir las negociaciones en forma constructiva y completarlas para la Quinta Conferencia Ministerial.

24. La representante de la República Checa dice que la lista de cuestiones, cuyo examen y consideración se propone en la nota del Presidente (JOB(02)/49), constituye una buena base para continuar el debate. La República Checa comparte plenamente las opiniones expuestas por las CE y sus Estados miembros en el documento JOB(02)/70. Tiene el convencimiento que el establecimiento del sistema multilateral de notificación y registro contribuiría a fortalecer y facilitar la protección de las indicaciones geográficas, que es uno de sus intereses prioritarios. Durante el proceso de establecimiento del registro debe concederse una gran importancia a la cuestión de los efectos jurídicos. Sólo un sistema que produzca esos efectos podría asegurar la protección efectiva de las indicaciones geográficas y, por ende, reflejar en forma adecuada las disposiciones estipuladas en el párrafo 4 del artículo 23. El sistema de registro debería contemplar la posibilidad multilateral de impugnar propuestas de inscripción de indicaciones geográficas y la forma más adecuada para ello es el procedimiento de oposición, que debería preceder al registro efectivo. De conformidad con la posición de su delegación relativa a la extensión de la protección adicional a las indicaciones geográficas, basada en la premisa de que todas estas indicaciones merecen el mismo nivel de protección, desea recalcar que el sistema debería quedar abierto a todas las indicaciones geográficas por igual. Agrega que sólo las propuestas presentadas por las CE y sus Estados miembros (IP/C/W/107/Rev.1) y Hungría (IP/C/W/255) realizan un auténtico intento de cumplir las prescripciones del párrafo 4 del artículo 23.

25. El representante de la República Eslovaca dice que su delegación atribuye también una gran importancia y atención al establecimiento de un sistema multilateral funcional de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Es consciente del mandato muy claro conferido por los Ministros en Doha y por el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como su país es copatrocinante del documento TN/IP/W/3, apoya las propuestas formuladas por las CE y sus Estados miembros (IP/C/W/107/Rev.1) y Hungría (IP/C/W/255). Su delegación estima que un registro multilateral podría contribuir a resolver muchas cuestiones problemáticas referentes al uso legítimo de las indicaciones geográficas, por ejemplo el vino "Tokay" originario de

la región de Tokay de la República Eslovaca. Su delegación no se propone establecer tan sólo una especie de lista de indicaciones geográficas notificadas, que no implique ninguna obligación jurídica para los participantes. La comunicación propone un sistema que no entraña ninguna carga financiera o administrativa. Su delegación tiene claro el sentido del término "multilateral" por lo que se refiere a la cobertura de la participación. Juzga, asimismo, que la clara división del proceso en dos fases -notificación y registro- impediría el uso de indicaciones geográficas que no cumplieran las prescripciones del párrafo 1 del artículo 22.

*Definición de la expresión "indicaciones geográficas" y condiciones que han de reunir las indicaciones geográficas para su inclusión en el sistema*

26. El representante de la República Checa dice que, en cuanto a las condiciones que han de reunir, todas las indicaciones geográficas que se ajusten a la definición prevista en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC satisfacen los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema. Asimismo, es evidente que no sólo se debe observar lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 22, sino también las excepciones contenidas en el artículo 24.

27. La representante del Perú dice que su delegación está de acuerdo en que la definición de "indicaciones geográficas" debería ser la que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto al alcance de la protección, ésta debe abarcar los vinos y las bebidas espirituosas.

28. El representante de Suiza dice que su delegación estima que la nota del Presidente constituye una base bien definida y que su país se encuentra plenamente preparado para examinar los cuatro puntos enumerados en esa nota. A su juicio, el establecimiento de un registro multilateral no tendría repercusiones para la definición de las indicaciones geográficas contenida en el párrafo 1 del artículo 22. Por consiguiente, su delegación está convencida de que ningún Miembro tiene que introducir modificación alguna en la definición del término. La definición del párrafo 1 del artículo 22 ha demostrado su utilidad durante muchos años. Es flexible: puede proteger los nombres geográficos de pequeñas localidades, como "Cognac", para las bebidas espirituosas; de regiones más extensas, como el "Napa Valley", para los vinos o, para citar un ejemplo que no se refiere a los vinos ni a las bebidas espirituosas, incluso de países, como "Luxembourg", respecto de la carne. Cualquier nombre o signo que evoque el origen geográfico de un producto que reúna los requisitos de la definición, en especial el vínculo entre la calidad, la reputación u otras características de ese producto y su origen geográfico, puede gozar de protección como una indicación geográfica. Una vez que se establezca el registro, cada Miembro de la OMC tendrá la oportunidad de examinar si una indicación geográfica notificada cumple plenamente los requisitos estipulados en el párrafo 1 del artículo 22 y merece la protección en su territorio conforme a lo dispuesto en la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

29. El representante de las Comunidades Europeas dice que el registro multilateral no debería tener ninguna repercusión en la definición de las indicaciones geográficas, establecida en el párrafo 1 del artículo 22, ni debe surtir ningún efecto respecto de las excepciones. El registro no modificará la situación en lo concerniente a la aplicabilidad de las excepciones. Dice que para que las indicaciones geográficas sean notificadas al sistema multilateral deben cumplir las prescripciones dispuestas en el párrafo 1 del artículo 22 y, en particular, el requisito de que el nombre se refiera a un producto "cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico". No debe restarse importancia al vínculo entre el territorio y la calidad, característica o reputación definitorias. Los Miembros de la OMC han aplicado los requisitos mínimos de la definición del Acuerdo sobre los ADPIC con arreglo a sus respectivos ordenamientos jurídicos. No obstante, los Miembros deben tener la posibilidad de evitar los efectos jurídicos del registro de las indicaciones geográficas en su territorio cuando haya una prueba *prima facie* de que un nombre notificado está en disconformidad flagrante con la definición de



indicación geográfica, contenida en el párrafo 1 del artículo 22. Las CE no proponen que se examine a fondo la forma en que los Miembros de la OMC aplican la definición de indicaciones geográficas caso por caso, aun cuando parece lógico que los nombres que constituyan un claro o "flagrante" uso indebido de la definición comprendida en el párrafo 1 del artículo 22 no se deben beneficiar de la protección que ha de facilitar el registro multilateral. Las CE han dado el ejemplo de una indicación geográfica hipotética "Vino de la Unión Europea", que claramente no cumple los criterios de la definición del párrafo 1 del artículo 22. Si se adoptara el criterio contrario, se correría el riesgo de que hubiese notificaciones que no correspondieran a una necesidad real de facilitar la protección de las indicaciones geográficas, sino únicamente al deseo de preservar algunos términos para determinado país. La propuesta de las CE y sus Estados miembros prevé un mecanismo de "impugnación" o de "oposición" que permitiría a cada uno de los Miembros de la OMC impedir "graves aplicaciones indebidas" del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC que afectasen a esos Miembros. Se podrían prever otras opciones, como la verificación independiente realizada por expertos, la Secretaría de la OMC u otro órgano *ad hoc*. Las CE esperan con interés trabajar con otras delegaciones que también comprendan la necesidad de evitar que se reste importancia al sistema.

30. El representante del Paraguay recuerda que algunas delegaciones han opinado que el mandato es claro; sin embargo, esas delegaciones, incluidas las que han presentado los documentos TN/IP/W/3 y JOB(02)/70, no han citado íntegramente el párrafo 4 del artículo 23 y, por ende, su alcance. Esta forma de proceder no ayuda; es como referirse al artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura, dando a entender que los Miembros no deberían subvencionar los productos agrícolas.

31. Con respecto a la definición del término "indicaciones geográficas", coincide con otras delegaciones en que esa definición es la que figura en el párrafo 1 del artículo 22. Recuerda que en la OMPI se han examinado diversos tipos de definición, que se deben tener en cuenta cuando se definan con precisión las indicaciones geográficas. En cuanto al alcance del sistema, toma nota de la intervención de la representante de la Argentina y dice que consultará con su capital la cuestión de las bebidas espirituosas.

32. La representante de Malasia, hablando en nombre de los miembros de la ASEAN, dice que en la sesión celebrada en marzo muchos Miembros insistieron en la necesidad de continuar las deliberaciones encaminadas a lograr una mejor comprensión de las cuestiones relativas a la negociación de un sistema multilateral. Dice que la lista representa un buen punto de partida para los debates y el esclarecimiento de las cuestiones relativas al sistema multilateral de los vinos y las bebidas espirituosas objeto del mandato con arreglo al párrafo 18 de la Declaración Ministerial. La representante tiene interés en que la Argentina se exprese más respecto a esta cuestión.

33. En cuanto a la definición de "indicaciones geográficas", dice que sería conveniente que el Consejo en Sesión Extraordinaria interpretara de común acuerdo ese término. Esa interpretación debería basarse en la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 22. De ese modo, los Miembros estarían en mejores condiciones para examinar la finalidad y el sistema de notificación. Asimismo se evitarían onerosos y prolongados debates acerca de si las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas cumplen los requisitos para su inclusión en el sistema multilateral. El párrafo 1 del artículo 22 define las indicaciones geográficas como indicaciones que identifican un producto como originario de un territorio, región o localidad de un país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica sea imputable a su origen. Por consiguiente, parece que hay varios aspectos relativos a esa definición. En primer lugar, en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, las indicaciones geográficas relativas a vinos y bebidas espirituosas se refieren a un producto. En consecuencia, no hay que remitirse a servicios, conceptos o símbolos. En segundo lugar, lo más probable es que las indicaciones geográficas sean nombres de lugares, ya que se señala que son indicaciones que identifican productos como originarios de zonas geográficas. En tercer lugar, las indicaciones deben vincularse también con determinada calidad, reputación u otra característica imputable a su origen. La definición contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC parece diferir del uso

de otras definiciones, como las "denominaciones de origen", definidas en otros acuerdos multilaterales como el Arreglo de Lisboa. En tanto que la denominación de origen designa o nombra un producto, por ejemplo "Champagne" o "Bordeaux", la definición del Acuerdo sobre los ADPIC emplea el término "identifiquen"; en otras palabras, vincula un producto a su lugar de origen. También sería útil esclarecer las diferencias entre los dos conceptos y con respecto a los términos "calidad", "reputación" y "otra característica del producto ... imputable a su origen geográfico".

34. El representante de Hungría dice que, a los efectos de la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, así como en función de la finalidad de la labor comprendida en el mandato previsto en el párrafo 4 del artículo 23, el concepto de "indicación geográfica" se define en el párrafo 1 del artículo 22. Su delegación estima que no es necesario introducir ningún cambio en la definición, ni se propone tampoco modificarla para crear el registro. Todo intento de cambiar la definición quedaría claramente fuera del mandato establecido en el párrafo 4 del artículo 23. El contenido fundamental del concepto de indicación geográfica, tal como se define en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, reside en la relación que debe existir entre la calidad, reputación y otras características de los productos, en este caso los vinos y las bebidas espirituosas, y su origen geográfico. Dice que muchos de los malos entendidos respecto de cuáles son los nombres que se ajustan a la definición del párrafo 1 del artículo 22 pueden atribuirse a que no se tuvo en cuenta la importancia de esa vinculación. Debido a la necesidad de establecer la relación entre la calidad, reputación y otras características y el origen geográfico de los productos, la cuestión de si un nombre se ajusta a la definición sólo puede determinarse caso por caso, teniendo en cuenta todos los aspectos específicos pertinentes de las distintas situaciones.

35. Pasando a la cuestión de las condiciones que se han de reunir para la inclusión en el registro, el orador se remite al objetivo del establecimiento del sistema enunciado en el mandato. Según el párrafo 4 del artículo 23, el sistema se establece para "facilitar la protección de las indicaciones geográficas ... que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema". Para lograr ese objetivo y facilitar una genuina protección, se deberían eliminar todas las indicaciones geográficas notificadas que no se ajustasen a la definición o que no estuvieran protegidas en sus países de origen. El objetivo del establecimiento del sistema, a saber, facilitar la protección, no se podría realizar si ingresaran al registro indicaciones geográficas notificadas que no se ajustaran a la definición o que no estuvieran protegidas en sus países de origen. Si no existiera un mecanismo a disposición de los Miembros para eliminar esos nombres notificados, el efecto jurídico del registro podría ser contrario al objetivo del mandato. Por esta razón las CE y Hungría propugnan la inclusión en el futuro sistema, como un elemento indispensable, de un procedimiento de oposición al registro de las indicaciones geográficas notificadas. Hungría ha presentado dos comunicaciones, en los años 2000 y 2001 (IP/C/W/234 e IP/C/W/255), en las que propone la incorporación de un elemento multilateral en el procedimiento de oposición o de impugnación. Las CE proponen que, en caso de desacuerdo sobre el registro de una indicación geográfica notificada, los Miembros de la OMC interesados -los Miembros que notifiquen e impugnen- deben celebrar consultas bilaterales con el propósito de dirimir el desacuerdo. Si en esas consultas bilaterales directas no se llega a una solución mutuamente aceptable, debe establecerse una posibilidad multilateral para resolver la diferencia. Ese elemento, en particular, brindaría una oportunidad adecuada a los Miembros más pequeños de la OMC para representar sus intereses y evitaría la posibilidad de abuso del procedimiento de oposición, al asegurar que no dependiese de los distintos Miembros la determinación respecto de si una impugnación está justificada o no. En cuanto a la forma del procedimiento multilateral, su delegación sugiere que el Consejo estudie la posibilidad de establecer un sistema de arbitraje específico. Señala que esta forma de solución de desacuerdos no es extraña en el marco de la OMC. Al respecto, se remite al artículo 25 y al párrafo 6 del artículo 22 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) y al párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. No obstante, su delegación está dispuesta a aceptar cualquier otra forma de solución de desacuerdos que tenga el mismo carácter multilateral y que sea sencilla y eficaz. El efecto de la decisión de los árbitros en el caso de las impugnaciones, en relación con el párrafo 1 del artículo 22 y el párrafo 9 del

artículo 24, sería *erga omnes*. Si el árbitro estimara que una indicación geográfica notificada no se ajusta a la definición o no está protegida en su país de origen, no se inscribirá en el registro. El efecto *erga omnes* es importante sobre todo por dos razones. Primera: ahorraría tiempo y esfuerzo a los participantes en el sistema, ya que si una sola impugnación prospera evitaría el registro de los nombres notificados que no se ajustasen a la definición o que no estuvieran protegidos en su país de origen; además los nombres contenidos en esas notificaciones no producirían, en consecuencia, efectos jurídicos en ningún Miembro de la OMC. Segunda: se evitaría una situación lamentable en caso de que los participantes no impugnaran las notificaciones y el efecto jurídico resultante del registro causara pérdidas o costos comerciales a los Miembros donde se originaron las indicaciones geográficas controvertidas, aun cuando esos Miembros hubiesen impugnado con éxito el registro al amparo del párrafo 1 del artículo 22 o al párrafo 9 del artículo 24. Además, los Miembros deben tener la oportunidad de impugnar el registro multilateral de las indicaciones geográficas notificadas invocando las excepciones previstas en el párrafo 4 (usos prioritarios y de buena fe), el párrafo 5 (solicitud o registro previos de una marca de fábrica o de comercio) y el párrafo 6 del artículo 24 (nombres genéricos). En el caso de las impugnaciones aceptadas, se registraría la indicación geográfica notificada, pero con una nota que indique que el registro no tiene efectos jurídicos respecto de los impugnantes que hayan tenido éxito en su impugnación. La razón por la cual no se produce un efecto *erga omnes* en el caso de dichas impugnaciones se debe a que la aplicabilidad de las excepciones previstas en el artículo 24 sólo podrá determinarse caso a caso. De acuerdo a la propuesta del Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos (IP/C/W/133/Rev.1), el registro multilateral de nombres que no se ajusten a la definición o no gocen de protección en el país de origen no podrá suspenderse y las autoridades nacionales estarán obligadas a remitirse a ellos en sus decisiones. Hungría no tiene muy claro de qué modo esa propuesta podría facilitar la protección. El orador acogería con agrado algunas aclaraciones sobre ese punto.

36. El representante de Australia dice que no hay ninguna duda de que la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC es la definición operativa a los efectos de la labor del Consejo en Sesión Extraordinaria. Dicha definición se acordó como parte del equilibrio de derechos y obligaciones alcanzado en la Ronda Uruguay, y su delegación no ve ninguna necesidad ni justificación para alejarse del punto de referencia ya acordado. Al intentar hacerlo, se correría innecesariamente el riesgo de retrasar la labor de este órgano. Su delegación considera que la definición, aunque sea aparentemente clara e inequívoca, está abierta, como todo texto jurídico, a diversas interpretaciones. Refiriéndose a la observación del representante de Suiza de que es una definición flexible, el orador dice que tal vez sea demasiado flexible. Es esencial que los Miembros lleguen a un común entendimiento sobre el alcance y el funcionamiento de la definición de las indicaciones geográficas contenida en el párrafo 1 del artículo 22. Sería un error asumir que todas las discrepancias acerca de términos específicos puedan resolverse fácilmente caso por caso, después de que se ha negociado el sistema multilateral, en particular con arreglo a un sistema de arbitraje engorroso, muy reglamentario y costoso que un Miembro sugirió con anterioridad. Su delegación estima que es más razonable que, en la presente etapa, el Consejo en Sesión Extraordinaria aborde algunas de las cuestiones más espinosas que se han planteado, y arroje alguna luz sobre aquello a lo que exactamente facilitara protección el sistema multilateral. Esta es la única manera en que los Miembros podrían saber con precisión cuál es la materia objeto del sistema multilateral.

37. En primer lugar, una cuestión muy básica consiste en determinar si los nombres de lugares no geográficos pueden incluirse en la definición del párrafo 1 del artículo 22. Australia no puede aceptar que los términos corrientes ingleses puedan responder a la definición de indicación geográfica del párrafo 1 del artículo 22. Las CE han sugerido que determinadas "menciones tradicionales" están "tan estrechamente ligadas a un origen geográfico, que responden a la definición de indicación geográfica que contiene el Acuerdo sobre los ADPIC". La cita se recoge de un comunicado de prensa de la Comisión en relación con el Reglamento de las CE 753/2002. Entre otras cosas, el Reglamento reserva al uso exclusivo de los productores portugueses de "vino de licor de calidad" las menciones de "vintage", "ruby" y "tawny". Esas palabras no son traducciones inglesas de menciones portuguesas,

son términos ingleses corrientes. Su delegación está sumamente preocupada porque términos corrientes ingleses como los mencionados puedan responder a la definición del párrafo 1 del artículo 22. Desde un punto de vista etimológico, es difícil creer que pueda haber términos descriptivos ingleses tan estrechamente ligados al Portugal, en cuanto indicación geográfica, que se ajusten a la definición de indicación geográfica del Acuerdo sobre los ADPIC. Como cabe suponer que las CE intentarán incluir en el sistema multilateral términos como los mencionados, su delegación considera que esta cuestión deberá seguir examinándose en el Consejo en Sesión Extraordinaria como parte de los trabajos en curso, a fin de evitar discrepancias en el futuro. Refiriéndose a la observación de las CE de que notificarían sus indicaciones geográficas a su debido tiempo, el orador señala que, si esa fecha de notificación fuese el día siguiente al día en que entre en vigor el sistema de registro propuesto, sería demasiado tarde. Las CE han dicho también en su comunicación que "no debe restarse importancia" a la relación entre el territorio y la calidad, característica o reputación definitorias. Se pregunta si el uso de términos ingleses para proteger una indicación geográfica portuguesa no supone "restar importancia" al concepto de indicación geográfica.

38. La segunda cuestión es si es legítimo limitar el tamaño o el tipo de unidad geográfica que puede considerarse como indicación geográfica. En particular, ¿puede el nombre de un país considerarse comprendido en la definición y, en caso afirmativo, en qué circunstancias? Por ejemplo, ¿puede "Australia" notificarse como indicación geográfica para vinos en el marco del sistema multilateral? ¿Puede el Canadá notificar la expresión de "Canadian Club" para el whisky?

39. Una tercera cuestión se refiere a cuántas o cuáles fases del proceso de producción han de llevarse a cabo en el lugar al que se refiere la indicación geográfica en cuestión, a fin de poder afirmar que la indicación geográfica se refiere a esa zona. Algunos de los reglamentos de las CE en la esfera de las indicaciones geográficas sugieren que todos los elementos del proceso de producción tengan lugar en la misma zona geográfica. Resulta interesante que, actualmente, este principio se impugne en los tribunales europeos, en relación con los términos correspondientes a la carne de cerdo y al queso. Una interpretación estricta de los requisitos del proceso de producción tal vez pueda excluir de la definición las indicaciones geográficas de los vinos y de las bebidas espirituosas de otros Miembros. En consecuencia, su delegación desearía que se siguiera estudiando esta cuestión.

40. En cuarto lugar, ¿cómo podrá el Miembro que notifique la reclamación de una indicación geográfica demostrar la "calidad, la reputación u otra característica" del vino o las bebidas espirituosas y demostrar que dichas características específicas pueden "atribuirse esencialmente a su origen geográfico"? Esa es la cuestión relativa a la "vinculación" que, según algunas delegaciones, reviste una importancia capital. Por consiguiente, es fundamental dejar claro qué se entiende por vinculación. El proyecto de legislación sobre indicaciones geográficas de algunos Miembros, que todavía están en proceso de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, parece abordar estas cuestiones únicamente a través de la definición en sí misma, dejando abierta la cuestión de cómo pueden probarse y cumplirse los dos criterios. ¿Deberían los Miembros que notifican reclamaciones de indicaciones geográficas al sistema incluir documentación justificativa que pruebe que el término se ajusta a la definición? En caso afirmativo, los Miembros tendrían que disponer de algún tipo de entendimiento colectivo sobre el tipo de información que debe incluirse.

41. Por último, existe la cuestión de la territorialidad y de cómo se aplicaría ese concepto a la definición en el contexto del sistema multilateral. Esto plantea algunas cuestiones fundamentales sobre el derecho a la protección de los términos de indicación geográfica reclamados. En opinión de Australia, no se cuestiona que el principio fundamental de territorialidad de la propiedad intelectual debe aplicarse al sistema multilateral. El principio de territorialidad es el concepto de que los derechos de propiedad intelectual solamente son válidos con respecto al territorio para el cual se han adquirido y en el que pueden hacerse valer. En otras palabras, se aplicarán las leyes propias de un país para determinar si una indicación geográfica goza de protección dentro de sus fronteras. El

efecto en la práctica de este principio es que los Miembros no están obligados a aceptar literalmente la reclamación de otro Miembro de que una indicación geográfica concreta notificada para un vino o bebida espirituosa se ajusta a la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si Australia notifica que el término "Australia" es una indicación geográfica para sus vinos, ¿estarían las Comunidades Europeas dispuestas a aceptar que este término es una indicación geográfica o querrían reservarse el derecho de aplicar la definición de indicación geográfica de la forma que suele aplicarse a escala comunitaria?

42. En lo que respecta a algunos otros asuntos conexos, el orador dice que no se plantea la cuestión de que un Miembro que notifica y solicita el registro de una indicación geográfica particular reclamada deba proteger efectivamente ese término a escala nacional. La referencia que figura en el párrafo 4 del artículo 23 a las indicaciones que sean susceptibles de protección supone las indicaciones que sean susceptibles de protección en función de las normas/criterios pertinentes establecidos en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. El *Collins English Dictionary* define "elegible" como "fit, worthy, or qualified, as for office" (idóneo, merecedor o cualificado, que reúne los requisitos necesarios para ser elegido). En este contexto, la cuestión consiste en determinar si un término concreto reúne las condiciones para beneficiarse de protección en el sentido de que reúne los requisitos de la Sección 3. No se justifica atribuir ningún otro significado a la frase "que sean susceptibles de protección" y, por consiguiente, no se justifica la suspensión de la aplicación del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni de ninguna de las demás normas de dicho Acuerdo en materia de indicaciones geográficas, en el contexto del sistema multilateral propuesto. A fin de que una indicación geográfica sea susceptible de protección, debe gozar de protección a nivel nacional y cumplir los requisitos de la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el último caso, se debe aplicar el principio de territorialidad.

43. La representante de Nueva Zelandia acoge con beneplácito la declaración del Presidente de que la labor del Consejo en Sesión Extraordinaria debe seguir su curso en el marco del mandato de Doha. Afirma que la definición de indicación geográfica es un concepto fundamental para su delegación. Influye, en mayor o menor grado, en la opinión de su delegación sobre todos los demás elementos del registro, especialmente su efecto jurídico. Se requiere una clara comprensión de dicho concepto para completar la labor del Consejo en Sesión Extraordinaria. Su delegación no comparte el criterio, propuesto por algunos, de que la cuestión de la definición se podría resolver en un examen caso por caso de las expresiones notificadas y registradas, es decir, después de las negociaciones celebradas en el Consejo en Sesión Extraordinaria. Dado el enorme volumen de expresiones que habrá de registrarse (miles), la tarea para un país como Nueva Zelandia sería sencillamente insuperable. Su delegación está de acuerdo en que el punto de partida para una definición debe ser el que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, como se desprende del conjunto de las deliberaciones efectuadas en el Consejo de los ADPIC, no hay un entendimiento común sobre la forma de interpretar esa disposición. Algunos Miembros enfocan esa definición con un criterio de un alcance y amplitud sumamente extenso, que va mucho más allá de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. La incorporación de un enfoque semejante a la definición con arreglo al registro concebido por las CE impondría, en efecto, una definición del párrafo 1 del artículo 22, que no es una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC, a otros países que tienen una opinión muy diferente sobre el alcance de la definición. Es evidente que los Miembros tienen criterios muy divergentes a ese respecto. Lamentablemente algunos Miembros han sido un tanto renuentes a participar en un buen debate sobre esas diferencias.

44. En primer lugar, ¿quedarían comprendidas en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC las expresiones que utilizaran nombres no geográficos y, por lo tanto, serían susceptibles de notificación y registro? Su delegación abriga dudas sobre ese punto, inclusive con respecto a la forma en que se establecería un vínculo claro entre esos nombres no geográficos y la definición del artículo 22, por lo que solicita que se siga examinando esta cuestión.

45. En segundo lugar, ¿se autorizaría en virtud de la definición la protección de un proceso o de un método de producción concreto bajo la forma de una indicación geográfica? La oradora se remite al ejemplo de "bresaola", que en las CE goza de protección como una indicación geográfica y se vincula a la geografía de Italia. Sin embargo, la materia prima -la carne- procede de otra geografía, a menudo de la Argentina. El método de producción y elaboración es el que se reserva exclusivamente la utilización de la indicación geográfica. Su delegación pone en duda que ese proceso de producción que puede repetirse tenga un vínculo inherente a un origen geográfico. También en desacuerdo con una definición amplia se encuentran las cuestiones que se plantearon, tanto en las sesiones ordinarias del Consejo de los ADPIC como en el Comité OTC, con respecto a una tentativa de las CE de reservar determinados términos genéricos conexos a la producción, o términos descriptivos, las denominadas "expresiones tradicionales", y algunas configuraciones relativas a los embalajes y envases a determinadas indicaciones geográficas. Es evidente que ello restringe mucho el etiquetado y las opciones comerciales de los productores que no estén asociados con esas indicaciones geográficas. Sin embargo, se trata de una cuestión también comprendida en el contexto de las deliberaciones sobre el registro. Por ejemplo, si los Miembros adaptaran ese tipo de definición amplia, discrecional y flexible de las indicaciones geográficas y si se registrara un término como "Port", entonces los otros conceptos, términos y procesos de producción que se han reservado para el uso exclusivo de esa indicación geográfica, por ejemplo "ruby" o "tawny", podrían beneficiarse también de los efectos jurídicos dimanantes del registro. ¿Finalizarían esos términos *de facto* en el registro? Si así sucediera, se daría lugar a una situación perversa en la que, al menos en el contexto de un registro previsto por las CE, Nueva Zelandia tendría que proteger esos términos, habituales y pertenecientes a todos los que hablan el idioma inglés, debido a su apropiación, mediante la reglamentación, por otra indicación geográfica de un país, por ejemplo el Portugal, con el cual Nueva Zelandia no comparte tradiciones lingüísticas o culturales. Eso no sólo impediría a los productores de Nueva Zelandia tener acceso a dichos términos, procesos y etiquetas genéricos, sino también se impediría que, por ejemplo, Australia hiciese lo mismo en el mercado de Nueva Zelandia. Ese enfoque de la definición es algo sencillamente inaceptable para su delegación.

46. Otra cuestión fundamental vinculada a la definición se refiere a la utilización del nombre de un país como indicación geográfica. El Acuerdo sobre los ADPIC lo prevé claramente. No obstante, algunos Miembros siguen negando el derecho de su país a utilizar su propio nombre, "Nueva Zelandia", como una indicación geográfica. Su delegación procurará obtener confirmación en la forma en que el sistema de notificación y registro trata la definición para confirmar y hacer operativo el derecho a utilizar el nombre de un país como una indicación geográfica.

47. Por último, su delegación comparte las opiniones de Australia sobre la cuestión de la territorialidad.

48. La representante del Canadá acoge con satisfacción el enfoque de la Presidencia de dividir el plan de trabajo de la sesión, aunque estima también que sería importante que se considerasen los distintos elementos en su integridad. Recuerda que algunas de las deliberaciones que tuvieron lugar en las sesiones ordinarias trataron también el tema de la definición. Asimismo, esas deliberaciones refuerzan el criterio de que los participantes en el Consejo en Sesión Extraordinaria tienen distintas perspectivas sobre la interpretación de la definición de indicaciones geográficas, contenida en el párrafo 1 del artículo 22, lo que claramente confirma que es necesario examinar más a fondo esa materia. No sería conveniente para ningún Miembro de la OMC que en alguna etapa posterior se plantearan concepciones erróneas. A juicio del Canadá, sería importante que se consideraran las siguientes cuestiones detalladas, si se desea llegar a un común entendimiento en la OMC acerca de cómo los Miembros pueden esperar que los demás Miembros interpretarán la definición de indicación geográfica.

49. ¿Qué se podría proteger con exactitud: el nombre de un lugar, el nombre de un país, un adjetivo común o un término descriptivo, y sobre qué bases? Según la experiencia del Canadá, el

nombre de un país es una indicación geográfica aceptable, pues queda claramente comprendido en la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Canadá tiene interés en escuchar la opinión de otros países, especialmente de parte de los solicitantes, si tienen una interpretación análoga de la definición que se utiliza en sus reglamentos nacionales. El Canadá experimentó muchas sorpresas cuando examinó con uno de los principales solicitantes la referida interpretación.

50. Una segunda cuestión se refiere a la forma de evaluar la calidad, reputación u otra característica. ¿Requieren los Miembros objetivos comunes para determinar en qué criterios podría basarse esa evaluación? También es importante la forma de determinar el vínculo entre situación geográfica y calidad, reputación u otras características.

51. Otra esfera que hay que considerar se refiere a si la indicación geográfica se produce totalmente en una localidad determinada. Se sabe que hay un volumen considerable de actividad comercial en relación con el vino a granel que se combina y embotella con la cosecha local, ¿sería o no necesario determinar si la cadena completa de producción o sólo partes de ésta tienen que llevarse a cabo en un lugar geográfico determinado? También existe el problema del origen de la materia prima contenida en el producto final. Tal vez el Consejo en Sesión Extraordinaria debería examinar normas de contenido.

52. Por último, hay que examinar la relación entre la definición y la aplicación territorial. El Canadá opina que la definición que debe aplicarse se ha de basar en la legislación del Miembro y no en la del país de origen. El Canadá coincide con Australia en que las expresiones tradicionales no podrían equivaler a las indicaciones geográficas. Los productores de vino francés no deben gozar de beneficios exclusivos en el mercado de la UE ni de derechos para emplear la palabra "chateau". Recuerda que el Canadá tiene dos idiomas oficiales y que "chateau" ("château") (castillo) es un término común. Asimismo, no es necesario definir el término descriptivo "dry" (seco) o "ruby" (rubí).

53. Por último, en cuanto a la pregunta planteada por el Presidente acerca de si la cuestión de la definición debe resolverse o no en el Consejo en Sesión Extraordinaria o caso por caso, el Canadá estima que, si los Miembros han de concluir con éxito las negociaciones para establecer un sistema de registro de vinos y bebidas espirituosas, sería fundamental que el Consejo formulara una interpretación común de la definición y de su alcance y aplicación; pues esos conceptos no podrían quedar librados a la interpretación de los distintos Miembros.

54. La representante de la Argentina dice que la definición aplicable debe ser la contenida en el párrafo 1 del artículo 22, que es aplicable a los vinos y bebidas espirituosas como a los demás productos. En términos generales y a modo de ejemplo, su delegación considera que las "indicaciones de procedencia" ("denominaciones de procedencia") no están comprendidas en la protección prevista en el sistema de notificación y registro ya que se refieren sólo al lugar de donde provienen los productos y falta el vínculo de calidad, reputación u otras características con el origen. Su delegación estima también que las "expresiones tradicionales" tampoco quedarían comprendidas, ya que son términos genéricos, del lenguaje común, que identifican parte de un proceso productivo y otras cuestiones, pero no conllevan un vínculo geográfico. Con respecto a las posibles discrepancias acerca de si una definición puede o no quedar comprendida en la definición, su delegación opina que podrían surgir discrepancias como consecuencia de la interpretación de la definición prevista en el párrafo 1 del artículo 22, puesto que la interpretación es de competencia exclusiva de cada Miembro. Las eventuales discrepancias deben resolverse en las respectivas jurisdicciones nacionales. Este tema no debería analizarse en el Consejo en Sesión Extraordinaria, es decir durante las negociaciones, ni caso por caso como un ejercicio colectivo cuando el sistema entre en vigor. La inclusión de esta temática pareciera prejuzgar que el sistema contará con un procedimiento de oposición, pero al respecto aún no existe acuerdo. La determinación, en el curso de las negociaciones, de las indicaciones geográficas "susceptibles de protección" parece impulsar una interpretación de la definición y, específicamente, de

los vínculos que el producto debe tener con su origen geográfico. En síntesis, la cuestión de la "elegibilidad para la protección" y de las eventuales discrepancias son cuestiones que los Miembros deberían interpretar y resolver en sus respectivas jurisdicciones nacionales, teniendo presente el carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual.

55. El representante de los Estados Unidos recuerda que en 1999 su país, junto con el Canadá, Chile y el Japón, presentó una propuesta para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas (IP/C/W/133/Rev.1). Toma nota de la observación formulada en el párrafo 5 del documento TN/IP/W/3 que sostiene que, hasta la fecha, sólo las propuestas presentadas por las CE y sus Estados miembros han representado un intento genuino de cumplir las prescripciones del párrafo 4 del artículo 23. Recuerda que, antes de la Conferencia Ministerial de Doha, hubo un debate en el Consejo de los ADPIC sobre la posibilidad de aplicar propuestas a las indicaciones geográficas de productos distintos del vino y las bebidas espirituosas. Desea esclarecer que, dado el mandato muy claro y restringido que la Declaración de Doha confirió al Consejo para establecer un sistema que comprenda vinos y bebidas espirituosas, las observaciones de su delegación se limitarán únicamente a un sistema de notificación y registro de vinos y bebidas espirituosas.

56. Su delegación respalda las declaraciones formuladas por Australia, Nueva Zelandia, el Canadá y otros países, sobre todo con respecto a las diferencias que los Miembros podrían tener en cuanto a la definición de "indicación geográfica". Las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas sobre el examen de la aplicación del párrafo 2 del artículo 24, revelan que el criterio para determinar lo que constituiría una indicación geográfica varía realmente en la legislación de los distintos Miembros que han suministrado información. Esas respuestas reflejan el hecho de que las indicaciones geográficas, al igual que otros derechos de propiedad intelectual, tienen un carácter territorial. Es probable que, como consecuencia de la falta de una interpretación común de la definición de indicación geográfica, contenida en el párrafo 1 del artículo 22, haya términos notificados por un Miembro que otros Miembros consideren no susceptibles de protección de conformidad con sus propias leyes nacionales. Debido a que los términos que se han de notificar tendrán que considerarse "susceptibles de protección" por el Miembro que notifique, éste debe, sin embargo, haber reconocido que el término es una indicación geográfica y, en tal calidad, su legislación nacional lo protege. A juicio de su delegación, es improbable que las negociaciones resuelvan las diferencias de criterios, porque cada Miembro enfocará la cuestión desde el ángulo de su propia legislación nacional. Algunos Miembros se han opuesto a cualquier debate sobre la definición de una indicación geográfica que pueda conducir al Consejo en Sesión Extraordinaria a establecer una interpretación común del término. Su delegación apoya ese debate. A falta de una interpretación clara y uniforme del párrafo 1 del artículo 22, que se aplique en la legislación nacional de todos los Miembros, su delegación considera que lo mejor para resolver cualquier diferencia sobre la notificación de una indicación geográfica concreta hecha por un Miembro es que intervenga la parte interesada con arreglo a la legislación nacional de ese Miembro, y no recurrir a un procedimiento de oposición sustancioso en Ginebra bajo los auspicios de la OMC. Si de conformidad con la legislación de un Miembro se acepta una impugnación, ese Miembro tendrá que retirar la notificación de ese término. Si la impugnación no prosperara, el término podrá permanecer en la notificación del Miembro y ser registrado, pero, habida cuenta del carácter territorial de las indicaciones geográficas, su presencia no garantizaría que fuera susceptible de protección de conformidad con la legislación de otros Miembros de la OMC o que en los mercados no existiera una excepción a su protección. El carácter territorial de las indicaciones geográficas se refleja en el uso, especialmente en relación con las excepciones previstas en los párrafos 4 a 8 del artículo 24, de las frases "en el territorio de ese Miembro" y "en ese Miembro". Algunos afirman que ello crearía incertidumbre, lo que obstaculizaría el acceso a los mercados, pero con respecto a las indicaciones geográficas no hay más incertidumbre que con respecto a cualquier otra forma de propiedad intelectual o, en realidad, con muchas otras materias relacionadas con la actividad comercial. Los Miembros, productores y consumidores deben disponer de un sistema de notificación y registro de las indicaciones geográficas de los vinos y



bebidas espirituosas que les suministre información que en la actualidad no está a su alcance y, de ese modo, no sólo se facilitaría la protección de esas indicaciones geográficas, sino en primer lugar su selección por los Miembros. Quienes procuren establecer nuevas indicaciones geográficas tendrán la información disponible, que podría buscarse de la misma manera que en los registros de marcas de fábrica o de comercio o en las bases de datos de patentes para determinar si ya existían derechos con anterioridad en una marca de fábrica o de comercio o en una invención.

57. El representante de las Comunidades Europeas dice que ningún Miembro discrepa de que la definición de indicaciones geográficas que debe utilizarse es la dispuesta en el párrafo 1 del artículo 22. Le preocupa que las delegaciones sugieran que es necesario adoptar una interpretación común del alcance y la aplicación del párrafo 1 del artículo 22. Esa sugerencia estaría en contradicción con lo expuesto por una delegación que calificó el mandato de Doha como un mandato claro y restringido. De la redacción del párrafo 4 del artículo 23 se desprende claramente cuál es el objetivo de las negociaciones; ese párrafo no dice "a reserva de" o "siempre que" haya una interpretación uniforme del alcance y la aplicación del párrafo 1 del artículo 22. A su juicio, ello no implica que algunos de los temas planteados por los Miembros no sean interesantes, pero no comprende cómo la adopción de una interpretación común sería conveniente para un acuerdo sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro. No se debe llevar adelante esta sugerencia. En cuanto a la inquietud expresada por la delegación de los Estados Unidos ante la indicación que figura en el párrafo 5 de la comunicación de las CE (TN/IP/W/3), de que sólo su propia propuesta y la de Hungría han representado un intento genuino de cumplir las prescripciones, dice que esa indicación está en armonía con las observaciones anteriores de su delegación en el sentido de que la propuesta presentada por los Estados Unidos y otros Miembros no daría como resultado un sistema útil, y ése es el espíritu con que debe entenderse el párrafo 5 del documento TN/IP/W/3.

58. Recuerda que los Miembros han contado durante un largo período con un documento de síntesis redactado por la Secretaría, que comprendía muchas de esas cuestiones. Seguramente se han escrito muchos libros y artículos sobre la definición y la aplicación del párrafo 1 del artículo 22. Asimismo, hay referencias al Reglamento 753/2002 de las CE, que fue examinado la semana anterior en el Comité OTC. En opinión de su delegación, ese Reglamento debe examinarse, si así se resuelve, en dicho Comité y no en el Consejo en Sesión Extraordinaria. En lo que respecta al término "tradicional", dice que hay ciertas expresiones tradicionales, tales como "vintage" (cosecha) o "ruby" (rubí), que podrían reservarse para vinos de la Comunidad y también para vinos de terceros países si ello fuera posible con arreglo a la legislación de la Comunidad. Las expresiones tradicionales se agregan a un vino que tiene una indicación geográfica; hay, por consiguiente, una distinción entre una "expresión tradicional" y una "indicación geográfica". Además, las expresiones tradicionales sólo gozan de protección en un idioma y respecto de un tipo de vino, licor, vino con burbujas, etc., de modo que la protección es mucho más limitada que la concedida a las indicaciones geográficas.

59. El representante del Brasil dice que su país es partidario de la "propuesta conjunta" de las delegaciones del Japón, el Canadá, Chile y los Estados Unidos sobre el establecimiento de un sistema de notificación y registro (IP/C/W/133/Rev.1). Su delegación estima que los nombres de países podrían quedar comprendidos en la protección de las indicaciones geográficas. Como declaró en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria respecto de la protección de "Cachaça", una bebida espirituosa protegida en el marco de la legislación del Brasil, su delegación coincide en gran medida con el criterio de que, aun cuando en el párrafo 1 del artículo 22 figura una definición amplia de las indicaciones geográficas, los parámetros de la protección podrían variar de un país a otro. Las indicaciones geográficas tienen un carácter territorial; su delegación está de acuerdo con algunos de los elementos planteados por ciertas delegaciones acerca de cómo impugnar las indicaciones geográficas. La mejor forma de hacerlo podría ser en el foro nacional en el que la indicación geográfica gozara de protección.

60. En lo concerniente a la experiencia de Australia con el uso de los términos "Port" (Puerto), "vintage" (cosecha) y "ruby" (rubí), dice que el problema no parece ser un error de traducción, sino más bien una confusión con respecto al ámbito de aplicación: las indicaciones geográficas no tienen relación alguna con las expresiones tradicionales. Coincide con la Argentina en que las expresiones tradicionales son ajenas a la cuestión del ámbito de aplicación de la definición, y el orador se pregunta si incluso tienen alguna relación con la propiedad intelectual.

61. El representante de Australia dice que el Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor en 1995 y, según sus conocimientos, en la OMC no se han planteado diferencias ni hay jurisprudencia sobre la definición de indicación geográfica. Es evidente que las deliberaciones realizadas en los dos últimos años en el Consejo de los ADPIC acerca del alcance y el registro han revelado algunos aspectos interesantes sobre lo que debe abarcar la definición. En primer lugar, es muy conveniente que cada país decida acerca de una indicación geográfica y el ámbito de aplicación de la definición contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente esa posibilidad. El orador trata de sugerir a los países que procuran, a través de este proceso, registrar el nombre de sus países como indicaciones geográficas, que dicho registro no sería permitido, al menos por uno de los principales solicitantes en esta esfera, ya que la decisión definitiva sobre si un nombre constituye una indicación geográfica correspondería, como han puntualizado los Estados Unidos, al país al que se le haya solicitado que proteja esa indicación geográfica. Con arreglo al principio de territorialidad, incumbe a cada Miembro decidir si una indicación geográfica es susceptible de protección. Habida cuenta de su propia experiencia, en un acuerdo bilateral con las CE, Australia señala a la atención de los Miembros que tratan de proteger el nombre de su país que ello tal vez no sea posible.

62. Coincide con el representante del Brasil en que las expresiones tradicionales no tienen ninguna relación con las indicaciones geográficas. Recuerda otra vez el comunicado de prensa de la Comisión Europea sobre su nuevo reglamento del vino, que afirma que las expresiones tradicionales están tan estrechamente vinculadas a un origen geográfico que pueden quedar comprendidas en la definición de indicación geográfica prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. Aun cuando acepta la explicación de las CE de que las palabras "tawny" (tostado), "ruby" (rubí) y "vintage" (cosecha) sólo se aplicarían a un grupo reducido de "Quality liqueur wines" (vinos licorosos de calidad), señala su preocupación ante el hecho de que las expresiones tradicionales sean consideradas indicaciones geográficas y pregunta hasta dónde se extendería el ámbito de esa aplicación. Ello significaría que cualquier palabra podría ser reivindicada por un participante como su indicación geográfica. En espera de las aclaraciones de las CE, así como de un entendimiento respecto a si las expresiones tradicionales podrían quedar al amparo de los derechos de propiedad intelectual, los participantes deben ser cautos y no ir demasiado lejos cuando acepten la actual definición.

63. El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose a la pregunta de Australia acerca de si los nombres no geográficos podrían ajustarse a la definición contemplada en el párrafo 1 del artículo 22, dice que a juicio de su delegación ninguna de las disposiciones de este artículo limita la protección de las indicaciones geográficas a los nombres geográficos. Algunos ejemplos son: "Vinho verde" para un vino portugués o "Basmati rice" (arroz basmati). Ante la pregunta de si es legítimo prohibir el uso del nombre de un país como indicación geográfica, afirma que la definición prevista en el párrafo 1 del artículo 22 no establece ese tipo de limitación. Las CE protegen "Luxembourg" (Luxemburgo) como parte de una indicación geográfica de productos cárnicos. Cualquier nombre de un país debe gozar de protección como una indicación geográfica mientras se pruebe el vínculo del producto con determinada calidad, reputación u otra característica. Incumbe a cada país probar ese vínculo. Australia, por ejemplo, podría solicitar protección para el nombre de "Australia" en calidad de una indicación geográfica, y demostrar cómo todos los vinos que usen esa indicación geográfica tienen un vínculo con determinada calidad, reputación u otra característica que son únicas. Se pregunta, sin embargo, cómo podría el vino australiano tener una sola calidad si Australia posee unas 90 indicaciones geográficas con diferentes calidades. En respuesta a la pregunta de cómo se demuestra que determinada calidad, reputación u otra característica es imputable fundamentalmente al

territorio, dice que cada administración nacional lo decidirá con arreglo a las pruebas. En virtud del principio de territorialidad, al país de origen le correspondería decidir si un término es o no una indicación geográfica; los terceros países sólo podrían denegar esa protección de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 24. En lo relativo a las fases de producción o al proceso de cultivo, que se han de llevar a cabo en el lugar mencionado en la indicación geográfica, la respuesta dependería del caso: en cuanto a los vinos, por ejemplo, a veces el proceso de embotellamiento debe hacerse en la zona geográfica porque el transporte de las botellas podría afectar a la calidad del vino protegido por la indicación geográfica. Reitera que el Reglamento 753/2002 se examinará en el Comité OTC si así lo desean los Miembros. A este respecto, a la delegación de las CE le parece que aún no se comprende muy bien la definición de "expresión tradicional". Las expresiones "ruby" (rubí) y "vintage" (cosecha) deben emplearse para un vino que ostente una indicación geográfica, de modo que se pueda distinguir entre una indicación geográfica y una expresión tradicional.

64. El representante de Hungría dice que coincide con Suiza, las CE, Australia y el Brasil en que el nombre de un país, en consonancia con el párrafo 1 del artículo 22, podría ser una indicación geográfica siempre que la calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a la particular situación geográfica. No obstante, el nombre de un país no se ajusta automáticamente a la definición del párrafo 1 del artículo 22. En realidad, a esa vinculación se refirió su delegación en su declaración anterior.

#### *Finalidad del sistema de notificación y registro*

65. El representante de la República Checa dice que la finalidad del sistema de notificación y registro, es decir la facilitación de la protección de las indicaciones geográficas, se relaciona estrechamente con todas las demás cuestiones. No se podría lograr esa facilitación efectiva sin determinar con claridad los efectos jurídicos que resulten para todos los Miembros participantes, y también es indispensable que se precisen las obligaciones para los no participantes.

66. El representante del Perú dice que la inscripción en el registro debe desempeñar una función importante para "facilitar" la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. A esos efectos, el registro no podría ser un simple sistema de notificación o banco de datos que no contribuya a respetar las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. Un registro así concebido no constituiría propiamente un sistema multilateral ni cumpliría el compromiso de reforzar la protección de las indicaciones geográficas. El término "facilitar" debe entenderse como el otorgamiento de los medios para que los Miembros identifiquen cuáles son las indicaciones geográficas que tiene la obligación de proteger.

67. El representante de las Comunidades Europeas dice que la protección de las indicaciones geográficas, consagrada en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, debe estar prescrita por la ley en todos los Miembros de la OMC. Tanto los titulares de derechos como los consumidores y las administraciones tienen por igual un auténtico interés en acceder más fácilmente a los medios legales que el Acuerdo sobre los ADPIC pone a su disposición para prevenir el uso indebido de las indicaciones geográficas en sus mercados. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC pueden elegir libremente los medios para aplicar las prescripciones contenidas en dicho Acuerdo. El registro multilateral debe respetar cabalmente ese principio.

68. Recuerda la nota el documento de síntesis preparado por la Secretaría de la OMC en que se resumen las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas formuladas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 (IP/C/W/253): la protección de las indicaciones geográficas se concede mediante los sistemas de registro de indicaciones geográficas, el registro de marcas de fábrica o de comercio y la jurisprudencia relativa a la legislación sobre competencia desleal. Por consiguiente, la facilitación de la protección de las indicaciones geográficas mediante un sistema

multilateral de registro remite necesariamente a la observancia de las obligaciones existentes y no a la creación de obligaciones nuevas. Su delegación respalda plenamente ese principio. En consecuencia, estima que a los efectos de "facilitar" la protección legal prescrita en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, un sistema multilateral de notificación y registro ayudaría a las administraciones a poner en aplicación la protección jurídica, y a los productores y consumidores a aprovecharla, sin necesidad de crear nuevas obligaciones sustantivas que excedan de las prescripciones actuales del Acuerdo sobre los ADPIC.

69. El orador sostiene que las propuestas presentadas por las CE y sus Estados miembros (IP/C/W/107/Rev.1) y por Hungría (IP/C/W/133/Rev.1) sugieren un sistema que no impone a los Miembros de la OMC ninguna nueva obligación sustantiva. Sin embargo, esas propuestas, al dar por supuesto el derecho a la protección de las indicaciones geográficas registradas, facilitan la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas, como se indica en la nota informal de las CE (JOB(02)/70). Lo que se afirma en esa nota está en perfecta armonía con la propuesta presentada en 2000, en el párrafo D.3 del documento IP/C/W/107/Rev.1, es decir, que los Miembros participantes han de facilitar la protección de una indicación geográfica concreta mediante la aportación de medios legales para que las partes interesadas utilicen el registro como una presunción del derecho a la protección de la indicación geográfica. Al mismo tiempo, los tribunales judiciales o las autoridades quedarían en libertad para examinar en forma independiente el valor probatorio de un registro y, por tanto, mantendrían su libertad para evaluar si realmente, en ese caso concreto, se hubieran infringido derechos e intereses, sin perjuicio del resultado de las negociaciones previstas en el párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Doha. Si se exige que quienes utilizan nombres notificados por otros países, por ejemplo, presenten sus argumentos primero ante un tribunal local, se desalentará la piratería y se beneficiará a toda la gama de partes interesadas: productores, consumidores y administraciones. Los productores que se propongan desarrollar una política de expansión internacional podrán reducir los costos de defensa de sus nombres en el mundo entero. Se desalentará el aprovechamiento ocasional sin contrapartida de nombres notificados, ya que es probable que los productores que utilicen indicaciones geográficas notificadas por otros países deban demostrar la validez de sus argumentos primero ante tribunales nacionales (e incurrir en las costas procesales) si así se les pide. Las asociaciones de consumidores con menos recursos que los productores y que, no obstante, se propongan impedir el engaño al consumidor podrían defender más fácilmente los intereses de éstos contra quienes comercializan sus productos con nombres notificados por otros a la OMC. En consecuencia, la usurpación disminuiría y por ende los litigios y los gastos administrativos. Las administraciones públicas dispondrán de información oportuna que les permitirá, por ejemplo, no registrar marcas de fábrica o de comercio que contengan indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23. Su delegación duda que la propuesta del Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos sugiera un sistema que de alguna manera "facilite" la protección de las indicaciones geográficas. En esa propuesta se indica que las autoridades nacionales estarían obligadas a remitirse a esa lista, pero no se prevé ningún mecanismo para supervisar el cumplimiento de tal obligación de "remitirse". Es más, la observancia de esa lista no tiene efecto alguno, en el supuesto de que las autoridades nacionales tan siquiera la consulten. En todo caso, las autoridades nacionales, incluso si se remiten a esa lista, pueden optar por ignorarla completamente a los efectos de la adopción de las decisiones administrativas nacionales. Por consiguiente, la publicación de una lista de indicaciones geográficas con exclusivos fines de información no garantiza que se "facilitaría" la protección. Asimismo, la propuesta del Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos no ayuda mucho a los productores, sino todo lo contrario. Los productores que utilicen nombres notificados podrán confiar en la posibilidad de que las autoridades nacionales, en virtud de esa propuesta, se remitan a la lista y, en ese convencimiento, se dé comienzo a un contencioso. La incertidumbre jurídica que reina en torno al efecto de esa propuesta redundará en un aumento de los contenciosos y, finalmente, de los gastos administrativos. A juicio de su delegación, la base de datos propuesta no aportaría beneficio alguno a los consumidores, que seguirían tan desprotegidos como antes. La propuesta no conlleva ningún valor añadido para la situación jurídica de los consumidores, que continuarían siendo testigos de múltiples casos de uso indebido de nombres en sus territorios.

70. La representante de Australia dice que su delegación considera que las palabras "para facilitar la protección de" significan facilitar, mediante procedimientos adecuados, la obtención del nivel de protección que ya debe darse a las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, y no aumentar ese nivel de protección. Si los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran previsto que el sistema multilateral conllevaría un aumento del nivel de protección, lo podrían, y lo habrían, explicitado. La oradora toma nota de las diferencias entre el texto del párrafo 4 del artículo 23 y el texto del párrafo 1 del artículo 24. El primero se refiere a la facilitación mientras que el segundo hace referencia a mejorar la protección en virtud del artículo 23. En el *Collins English Dictionary* se define "facilitate" (facilitar) como "*to assist the progress of*" (contribuir al progreso de). En cambio, "progress" (progreso) se define como "*movement forwards, especially towards a place or objective*" (acción de ir hacia delante, especialmente hacia un lugar u objetivo). En consecuencia, "facilitate" (facilitar) puede definirse como un movimiento hacia delante a lo largo de un camino horizontal hacia un objetivo definido. En estos términos, su significado es claramente distinto de los conceptos de mejora o aumento, que implican una trayectoria ascendente. Para responder a la cuestión planteada en la nota del Presidente, la oradora dice que la finalidad del sistema multilateral es ayudar a los nacionales de los Estados Miembros a lograr el progreso en la aplicación del nivel de protección existente para las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, como dispone el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 4 del artículo 23 fue redactado como parte integral de las normas especiales del artículo 23 relativas a la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. Jurídicamente, la mejor manera de caracterizar el artículo 23 es como *lex specialis*, que tendrá prioridad sobre la norma general para la protección de las indicaciones geográficas que figura en el artículo 22. Por consiguiente, cuando hablamos de facilitar la protección que debe darse a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, los Miembros nos estamos refiriendo a facilitar la protección prevista en el artículo 23. En consecuencia, no es necesario que el sistema multilateral facilite también la protección prevista en el artículo 22. El sistema multilateral no tiene como finalidad dotar a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas de un nivel de protección mayor que el que actualmente ya se da a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas con arreglo al artículo 23. Tampoco tiene la finalidad de conferir un nivel supranacional o un nivel global de protección que esté por encima y más allá de la protección concedida a cualquier otro tipo de derecho de propiedad intelectual. Esa situación podría darse si los Miembros consideran que se les priva del derecho consagrado por el principio de territorialidad de aplicar sus propias leyes en la formulación de determinaciones sobre protección de la propiedad intelectual dentro de sus fronteras, lo que limitaría a unos pocos países sumamente ricos el uso exclusivo y la rentabilidad económica de determinados nombres. Australia no puede aceptar ningún sistema multilateral de notificación y registro que tenga ese tipo de efectos.

71. De la interpretación de su delegación de otros sistemas multilaterales de notificación y registro, como el sistema del artículo 6ter sobre signos y punzones oficiales del Convenio de París, el Acuerdo de La Haya relativo a los dibujos o modelos industriales y el Protocolo de Madrid en la esfera de las marcas de fábrica o de comercio, se desprende que, en última instancia, todos se basan en las determinaciones formuladas en virtud de la legislación nacional para determinar el derecho a la protección y la protección propiamente dicha. Su delegación está comprometida a negociar un sistema multilateral ideado para asistir a los nacionales de los Miembros participantes a lograr progresos en el nivel de protección existente de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 23. Con dicho objetivo, el sistema ejecutaría una operación inconfundible y de valor añadido en el contexto de las normas vigentes, pero sin crear ninguna obligación adicional a las ya establecidas en el Acuerdo. Los países Miembros desarrollados y en desarrollo ya están obligados a aplicar la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC de la forma más adecuada a su propio sistema y práctica jurídicos, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

72. En lo referente a cómo deberían considerarse las disposiciones del artículo 24 en el sistema multilateral, habida cuenta de que el sistema no prevé ningún aumento de los niveles de obligación existentes, no se plantea la cuestión de que todas las excepciones dispuestas en el artículo 24, en particular la cláusula de anterioridad destinada a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas (párrafo 4 del artículo 24), la excepción relativa a las marcas de fábrica o de comercio (párrafo 5 del artículo 24) y la excepción relativa al uso habitual (párrafo 6 del artículo 24) deban seguir aplicándose. Los Miembros que participan en el sistema deben poder continuar haciendo valer sus derechos en virtud de estas disposiciones. El mecanismo práctico por el que los Miembros pueden reivindicar su derecho a las excepciones del artículo 24 es una cuestión que debe seguir estudiándose. Sin embargo, su delegación desea señalar que, en cuanto a la definición del párrafo 1 del artículo 22, el principio de territorialidad es una cuestión fundamental. La historia del uso de menciones de indicaciones geográficas concretas reclamadas y, por consiguiente, la aplicabilidad de las excepciones, serán diferentes en cada Miembro, y ese hecho debe reflejarse plenamente en cualquier sistema multilateral. Los tribunales nacionales son los que se encuentran en mejores condiciones para formular determinaciones sobre el uso de determinados términos en un país.

73. El representante de Hungría se remite a su intervención en lo relativo a la categoría de cuestiones anteriores y a la cuestión de la finalidad. En opinión de su delegación, el mandato que exhorta a la facilitación de la protección de las indicaciones geográficas se refiere al cumplimiento de las obligaciones existentes y no a la creación de nuevas obligaciones sustantivas. Observa que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC faculta a los Miembros para que decidan sobre los medios de dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Acuerdo y, como lo ha demostrado el examen del párrafo 2 del artículo 24, los Miembros optan efectivamente por diferentes sistemas que fluctúan entre la Ley de competencia desleal e imitación fraudulenta y los sistemas de registro de marcas de fábrica o de comercio hasta registros de indicaciones geográficas. Su delegación no tiene el propósito de cuestionar los derechos de los Miembros de la OMC dimanantes del párrafo 1 del artículo 1 o de crear nuevas obligaciones sustantivas para los Miembros como parte del establecimiento del registro. La razón para impulsar un sistema de registro eficaz, que produzca genuinos efectos jurídicos, es ayudar a los productores, consumidores y administraciones a garantizar la observancia de las obligaciones existentes. En pocas palabras, en la mayoría de los casos resultaría difícil, si no imposible, para el titular medio del derecho a una indicación geográfica o los productores, como los productores húngaros de vino en pequeñas aldeas, hacer valer los derechos que les corresponden en virtud del artículo 23, ya que tendrían que justificarlos desde el principio ante los tribunales locales, en algunos casos a miles de kilómetros de sus hogares, en el marco de ordenamientos jurídicos completamente diferentes. Esta situación amenazaría frustrar la clara intención de los Miembros de la OMC de conceder el nivel de protección estipulado en el artículo 23 a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

74. En lo relativo a la forma en que se podría facilitar la observancia de los derechos vigentes, las CE y Hungría han propuesto que el registro multilateral produzca el efecto jurídico de establecer una presunción salvo prueba en contrario del derecho a la protección. En respuesta a las reacciones que suscita la propuesta de Hungría, el orador dice que no prevé la creación de un tribunal supranacional, ni aboga por éste, en el marco del sistema que se ha de instituir. Hungría no propicia un sistema que imponga decisiones a las autoridades y tribunales nacionales. El registro sólo implicaría que los que utilizaran nombres ajenos registrados multilateralmente tendrían, en el evento de ser impugnados, que hacer valer sus argumentos ante los tribunales. Por último, los Miembros tendrían la posibilidad multilateral, con arreglo al procedimiento de impugnación propuesto por Hungría, de filtrar las indicaciones geográficas que no se ajustaran a la definición del párrafo 9 del artículo 24. Asimismo, se garantizaría la continua utilización de las excepciones contenidas en el artículo 24. Además de proteger a los productores que sean titulares de derechos a una indicación geográfica, un registro que produzca el efecto jurídico de crear la presunción del derecho a la protección ayudaría también a las asociaciones de consumidores y a las administraciones nacionales. A ese respecto, señala a la

atención de las delegaciones las consideraciones formuladas en los párrafos 19, 20, 21 y 22 del documento JOB(02)/70, presentado por las CE y sus Estados miembros.

75. En lo que concierne a la propuesta del Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos (IP/C/W/133/Rev.1), el orador se pregunta si la base de datos propuesta facilitará la protección. En primer lugar, esa base no creará un mecanismo para filtrar los nombres que no deben gozar de protección. En segundo lugar, la base no parece tener ningún efecto jurídico real, ya que las autoridades nacionales sólo estarían obligadas a remitirse a la lista y a otras fuentes de información pertinentes, y podrán decidir ignorar la lista por completo. No está seguro de que ese sistema justifique los costos de su creación y funcionamiento. Propone que los copatrocinantes expliquen con más detalle, desde su punto de vista, por qué ese sistema será útil para sus autoridades, sobre todo a la luz del hecho de que incluso los nombres que estén en franca disconformidad con el párrafo 1 del artículo 22 o el párrafo 9 del artículo 24 podrán ingresar a la base de datos. ¿No les preocupa que esa lista pueda crear más confusión que claridad acerca de cuáles son los nombres que deben gozar del nivel de protección previsto en el artículo 23? ¿No les preocupa que ese sistema pueda incluso dar ideas sobre qué copiar si los productores de vino advierten que algunas indicaciones geográficas son notificadas y registradas automáticamente por más de un Miembro?

76. La representante de la Argentina dice que la expresión "facilitar la protección" se refiere a la creación de un registro en el cual los Miembros participantes pongan en conocimiento, en el marco de la OMC, las indicaciones geográficas que se protegen en su territorio y, de ese modo, se haría "más fácil" a los países la protección de los vinos y bebidas espirituosas. Refiriéndose a la segunda frase del párrafo 5 de la nota de la Presidencia, que emplea las palabras "no aumentar ese nivel de protección", dice que no se debería aumentar ese nivel. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Ese párrafo también estipula que los Miembros "podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". Por consiguiente, los Miembros tienen la potestad de decidir el grado de protección que han de otorgar, siempre que se cumpla el estándar mínimo exigible, y la forma de incorporar las obligaciones que emanan del Acuerdo sobre los ADPIC a sus legislaciones nacionales. En otras palabras, cada país es soberano para establecer el grado de protección mientras éste sea compatible con el Acuerdo, los mecanismos que estime apropiados para proteger las indicaciones geográficas y los criterios de elegibilidad establecidos.

77. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 24, no podrían notificarse ni registrarse indicaciones geográficas que no estuvieran protegidas en el país que reivindica la protección; siendo ello, en consecuencia, una condición previa. Los derechos derivados de las excepciones establecidas en los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que pueden instrumentarse a nivel de las legislaciones nacionales de cada Miembro, deben, en consecuencia, tener plena vigencia en el marco del sistema. El párrafo 1 del artículo 24 no está vinculado a estas negociaciones, ya que las negociaciones a que se hace referencia en ese artículo están destinadas a "mejorar" la protección de determinadas indicaciones geográficas, es decir, están destinadas a la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales para mejorar la protección de indicaciones individuales.

78. El representante de los Estados Unidos dice que el artículo 24 explica con claridad que la finalidad del sistema de notificación y registro es "facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos" y bebidas espirituosas, a saber, facilitar los niveles existentes de protección contenidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Está perplejo por la declaración de las CE que sugiere que su propuesta no impondría nuevas obligaciones a los Miembros. Es evidente que no es así. Australia ha aportado a los participantes útiles definiciones del término "facilitar". A este respecto, la palabra es muy adecuada. Sin duda, no implica que el sistema de notificación y registro

aspire a asegurar la protección de determinadas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas y a impedir que se hagan valer, dentro de los territorios de los Miembros, algunas de las excepciones previstas en el artículo 24 o cualquier otro fundamento en virtud del cual se podría impugnar una determinada indicación geográfica. El párrafo 37 del documento de las CE (JOB(02)/70) aclara que la propuesta se propone negar el acceso de los Miembros a varias excepciones estipuladas en el Acuerdo, y que los Miembros ya no podrían hacer valer la excepción relativa a los términos genéricos como fundamento para oponerse a indicaciones geográficas. Los proponentes exigirían a los Miembros de la OMC que tramiten el procedimiento de oposición en Ginebra, en lugar de facultar a las partes interesadas, en consonancia con el texto actual del Acuerdo sobre los ADPIC, para que tramiten dicho procedimiento con respecto a determinadas indicaciones geográficas en el marco de la legislación nacional. De hecho, esto impondría una nueva obligación nacional a todos los Miembros y originaría un gran número de indicaciones geográficas que todos los Miembros tendrían que revisar y tal vez oponerse a ellas. No entiende cómo ello no podría considerarse una obligación nueva y gravosa. En la actualidad, el Acuerdo sobre los ADPIC no exige ninguna de esas obligaciones, ni éstas se podrían invocar legítimamente como parte de una "facilitación" de la protección existente.

79. La representante del Canadá dice que su delegación se adhiere a las declaraciones formuladas por Australia, los Estados Unidos, la Argentina y otros países. El Acuerdo sobre los ADPIC es claro en cuanto a la finalidad del sistema de notificaciones al emplear las palabras "para facilitar". En términos de inglés corriente, se trata de simplificar el proceso de protección de los intereses nacionales. Las negociaciones deben conducir a la creación de un sistema de registro que ayude a todos los Miembros de la OMC a beneficiarse de las disposiciones del artículo 23. La finalidad de negociar un sistema de registro de vinos y bebidas espirituosas no tiene el propósito de confundir el proceso, ni se propone crear ninguna nueva obligación ni carga administrativa, o disminuir en alguna forma los derechos comprendidos en el artículo 23.

80. La representante de Nueva Zelandia observa que el Consejo en Sesión Extraordinaria no tiene un mandato para mejorar el nivel de protección previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, ni tiene un mandato para modificar el nivel en que esa protección se otorga. El objetivo del registro debe ser "facilitar" la observancia de la protección en el plano nacional, como en la actualidad se exige en el Acuerdo sobre los ADPIC; en otras palabras, la obligación de proteger las indicaciones geográficas deriva del Acuerdo y no del registro. Se ha de cumplirla en una forma concreta, y no crear un nuevo estrato de efectos jurídicos supranacionales. Estima que podría haber cierta convergencia a ese respecto: el párrafo 17 del documento de las CE (JOB(02)/70) indica que por "facilitación de la protección de las indicaciones geográficas mediante un sistema multilateral de registro [se entiende] necesariamente la observancia de las obligaciones vigentes y no la creación de obligaciones nuevas". La diferencia entre los Miembros surge al interpretar qué propuestas en realidad lo hacen y los Estados Unidos indicaron claramente por qué la propuesta de las CE no satisface esa prueba. En cuanto a las disposiciones del artículo 24 y a las excepciones contenidas en él, dice que no deben reducirse los derechos vigentes establecidos en esas excepciones.

81. El representante de Suiza dice que el párrafo 4 del artículo 23 especifica que el sistema debe "facilitar la protección de las indicaciones geográficas". Eso significa, por ejemplo, que el registro multilateral que se ha de establecer debe proporcionar a los gobiernos un instrumento que facilite su labor de llevar a cabo la protección de las indicaciones geográficas, tal como lo exige el Acuerdo sobre los ADPIC. El registro debe, por ejemplo, ayudar a las autoridades -inspectores de marcas de fábrica o de comercio, jueces o autoridades aduaneras- a determinar en un caso particular si están examinando una indicación geográfica o no. Los productores dispondrían también de un instrumento para facilitar la observancia de sus indicaciones geográficas con la inversión de la carga de la prueba en los litigios. Al mismo tiempo, el registro podría servir como una fuente de información en cuanto a la legitimidad del uso de una indicación para sus productos. Sin embargo, para facilitar la protección de las indicaciones geográficas en la forma señalada, es importante crear un registro que



tenga efectos jurídicos y que sea vinculante para todos los Miembros de la OMC. La creación de una simple base de datos no logra esa facilitación de la protección. Hace hincapié en que el establecimiento de un registro con efectos jurídicos no cambiaría el actual nivel de protección concedido por la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC; no obstante, el registro facilitará efectivamente la protección de una indicación geográfica determinada, en contraposición a una simple base de datos en la que la enumeración de una indicación geográfica no tiene efecto jurídico alguno.

82. El representante de las Comunidades Europeas dice que los vinos y las bebidas espirituosas se benefician de la protección contemplada en los artículos 22 y 23 y pregunta a la delegación de Australia si está de acuerdo con ello. Agrega que la propuesta de las CE respeta cabalmente el principio de territorialidad planteado por Australia. Es por ello que las CE proponen un sistema de impugnación y oposición que facultaría a los Miembros de la OMC para tener plenamente en cuenta sus especificidades territoriales. Coincide con Australia en que las excepciones se seguirían aplicando y podrían ejercerse mediante el procedimiento de oposición contenido en la propuesta de las CE. La propuesta no implica mejorar la protección estipulada en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

83. El representante de los Estados Unidos dice que tiene la impresión de que la propuesta de las CE aumenta el nivel de protección de las indicaciones geográficas y de las cargas y responsabilidades actuales de los Miembros.

84. La representante de Australia, en respuesta a la pregunta de las CE sobre la aplicación de los artículos 22 y 23 dice que, en el marco del derecho internacional, el artículo 23 es una *lex specialis*. Por consiguiente, tiene un nivel de protección superior al que se concede en virtud del artículo 22. Desde la perspectiva del derecho internacional, la *lex specialis* predomina sobre la *lex generalis*, y no hay ninguna razón para que las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas necesiten beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 22. Sobre la aplicación del principio de territorialidad, su delegación no concibe cómo un procedimiento de oposición multilateral podría realmente aplicarse al principio de territorialidad. El sistema que Hungría propone consistiría en un grupo de arbitraje, integrado por miembros de nacionalidad desconocida, que no estaría en condiciones de comprender las resoluciones adoptadas por tribunales nacionales que examinan las percepciones de los consumidores y determinan si un término ha pasado a ser genérico en determinados territorios. Su delegación no cree que el sistema podría aplicarse de manera eficaz en el plano multilateral.

85. La representante de la Argentina solicita a las CE que confirmen si todas las excepciones, incluidas las que se usaban permanentemente antes de que el Acuerdo sobre los ADPIC entrara en vigor, seguirán siendo plenamente válidas.

86. El representante de las Comunidades Europeas dice que el sistema multilateral no repercutirá en las excepciones del artículo 24.

87. La representante de Malasia, hablando en nombre de los miembros de la ASEAN, afirma que se entiende que la finalidad del párrafo 4 del artículo 23 consiste en el establecimiento de un sistema de notificación y registro de vinos y bebidas espirituosas. El establecimiento en sí sería el medio para facilitar la protección prevista en el artículo 23. El sistema de notificación ayudaría a las autoridades nacionales a evitar el uso de una indicación geográfica o a anularla. En consecuencia, el registro tiene por objeto prestar asistencia a los medios jurídicos nacionales para cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 23. No debe servir para aumentar el nivel de protección.

88. La representante de Australia cita el ejemplo de un término inscrito en el registro e impugnado; ambas partes celebrarían negociaciones para resolver el desacuerdo; si las negociaciones no se concluyeran dentro de 18 meses contados desde la fecha de la notificación inicial, las partes

acordarían someter el caso a un arbitraje vinculante. Ese procedimiento no es compatible con la forma en que el Acuerdo sobre los ADPIC está estructurado en la actualidad: ninguna de las disposiciones del Acuerdo obliga a un Miembro a celebrar un arbitraje solicitado por otro Miembro que ignora cómo otros Miembros aplican el Acuerdo en sus territorios. Eso es similar a la cuestión de las expresiones tradicionales, donde las CE han asegurado a los Miembros que hay una diferencia entre las expresiones tradicionales y las indicaciones geográficas, pero, sin embargo, han indicado en una declaración pública referente al Reglamento 753/2002 que las expresiones tradicionales son, en efecto, indicaciones geográficas y, en consecuencia, quedan comprendidas en la definición de indicación geográfica.

89. El representante de Hungría, en respuesta a una pregunta de Australia sobre qué entienden los proponentes por "ninguna nueva obligación sustantiva", dice que el nivel de protección concedido para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas no se aumentará en el marco del sistema propuesto. Sobre la pregunta acerca de nuevas cargas, sostiene la opinión de que habrá nuevas cargas; la notificación de por sí es una nueva carga. Se pregunta cómo los Miembros podrían establecer un sistema sin crear nuevas cargas.

90. El representante de las Comunidades Europeas explica por qué las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas gozan de la protección de los artículos 22 y 23. El artículo 23 prohíbe la utilización de una indicación geográfica de un vino específico para otro vino. Por ejemplo, podría prohibir la utilización de una indicación geográfica australiana, "Barossa", para un vino de las CE. Asimismo, podría prohibir la utilización de una indicación geográfica de bebidas espirituosas como "Scotch whisky" para un whisky de la Argentina. No obstante, ninguna de las disposiciones del artículo 23 impide la utilización de una indicación geográfica de bebidas espirituosas, por ejemplo "Cognac", para un vino o la utilización de una indicación geográfica de un vino para una bebida espirituosa o, aun menos, la utilización de una indicación geográfica de un vino como "Champagne" para un perfume o un servicio. Por eso es que, en un caso real ocurrido en Francia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 -que constituye la protección por defecto para todos los productos, incluidos los vinos y bebidas espirituosas- el tribunal francés estimó que el artículo 22 y el criterio del engaño al consumidor prohibían la utilización del nombre "Champagne" en un perfume.

91. La representante de Australia dice que el ejemplo dado por el representante de las CE muestra realmente cuán lejos pueden llegar las ambiciones de las CE. En virtud de ese ejemplo, los Miembros no podrían utilizar el término "rubí" para describir una piedra semipreciosa muy conocida de color rojo. Con respecto a la cuestión de las obligaciones sustantivas, en el párrafo 29 del documento de las CE (JOB(02)/70) se declara que el término registro hace referencia a un modo específico de aplicar la prescripción contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, que se diferencia del régimen del *common law* de carácter jurisprudencial. Este enfoque sugiere que las propuestas de las CE restringen los derechos de los Miembros y equivalen a un aumento de las obligaciones.

92. El representante de las Comunidades Europeas afirma que "ruby" (rubí) no es una indicación geográfica en las CE, de modo que no hay razones que impidan utilizar ese término respecto de joyas. No obstante, el criterio del engaño al consumidor podría aplicarse a ese tipo de casos. Duda que el consumidor pueda ser engañado por la utilización de una indicación geográfica en una joya. Las obligaciones o los efectos jurídicos que la notificación de una indicación geográfica podría entrañar en el contexto del registro propuesto por las CE no generarían nuevas obligaciones porque seguiría siendo posible hacer valer las excepciones. Éstas podrían ejercerse de un modo diferente, mediante el procedimiento de oposición, pero ello no significa que ya no se admitan.

93. El representante de los Estados Unidos dice que, según la comunicación de las CE (párrafo D.4 del documento IP/C/W/107/Rev.1), los Miembros no dispondrían de las excepciones después del plazo de 18 meses, lo que no sucede actualmente con arreglo al Acuerdo. El orador pide

una aclaración: ¿si un Miembro no tiene éxito en el procedimiento de oposición o no se opone, estaría facultado para acogerse a las excepciones previstas en el artículo 24?

94. El representante de Sudáfrica pide la misma aclaración al representante de las Comunidades Europeas.

95. El representante de Australia dice que, en un sistema en el que un Miembro perdería sus derechos si no impugnará en el plazo de 18 meses, todos los Miembros tendrían que impugnar la indicación geográfica notificada ya que habría un grado de incertidumbre respecto de sus derechos. Recordando el ejemplo del queso "Feta", afirma que la impugnación llevó a los alemanes, los daneses y otros ocho años de procedimientos judiciales, cabildeos, gastos y recursos. ¿Dónde y cómo se obtiene la prueba en ese caso? Se trata de algo totalmente centroeuropeo y esa es la inquietud de su delegación. Si una indicación geográfica notificada ha de ser impugnada y sometida a arbitraje, un árbitro no sabría cómo se debe considerar un término en el territorio del país reclamante.

96. El representante de las Comunidades Europeas explica que, de conformidad con la propuesta de las CE, un Miembro podrá oponerse a una indicación geográfica notificada al amparo de las excepciones y, una vez que haya presentado esa oposición, las excepciones continuarán por lo que se refiere al Miembro interesado. Cada país tendrá la oportunidad de hacer valer las excepciones por conducto de un procedimiento de oposición, y en esa medida las excepciones no desaparecerán. Si se estimara que un nombre es un nombre genérico, un Miembro quedaría en libertad para oponerse al registro de una indicación geográfica. Las CE no proponen un sistema en el que dos países perderían o ganarían, sino uno en el que los países negociarían en caso de oposición y tendrían una oportunidad para resolver las diferencias en forma satisfactoria para ambos, como cualquier negociación entre dos Miembros de la OMC. Lo que las CE proponen en el Consejo no es aplicar su propio sistema en el plano multilateral, sino un enfoque más modesto. La propuesta reseña los rasgos principales que tendría ese registro. Como la propuesta aún tiene una forma muy preliminar, hay que determinar cada posibilidad y las consecuencias en el caso de que un país no utilice determinada excepción a los efectos de la oposición. Su delegación está dispuesta a trabajar con todos los Miembros para encontrar una solución apropiada para esos casos. Explica asimismo que el caso "Feta" todavía se está examinando a nivel de las CE.

97. El representante de Hungría señala que, si en el sistema no se prevé una oposición, algunos Miembros notificarán nombres tales como "Tokay". ¿Cuál sería el procedimiento que emplearía su país para proteger los intereses de sus productores? ¿Tendrían sus productores que comparecer ante los tribunales de esos Miembros? Ello parece extremadamente costoso y difícil.

98. La representante de Australia, respondiendo a Hungría, dice que se trata de una pregunta improcedente porque Australia no tiene intención de notificar "Tokay" como una indicación geográfica australiana en el sistema multilateral. Da seguridades a Hungría de que si los productores de vino húngaros tienen dificultades, Australia ofrece los medios jurídicos para impedir la utilización falsa de esa indicación geográfica en Australia.

*¿Qué se entiende por "sistema de notificación y registro"?*

99. La representante de la República Checa dice que su delegación apoya la opinión de las CE de que el proceso debe consistir en dos fases, a saber, la notificación y el registro. Si bien comprende que a este respecto hay que resolver muchas cuestiones procesales, opina que en la presente etapa es necesario diferenciar claramente las dos fases. La notificación debe preceder al registro y, aunque es indispensable para la transparencia de todo el proceso, no podría sustituir a la fase del registro, que entraña consecuencias jurídicas.

100. El representante del Perú dice que debe constituirse el registro de indicaciones geográficas que se ajuste fielmente a los criterios establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, es lógico que el "sistema multilateral de notificación y registro" cuente con un procedimiento apropiado que garantice que la inclusión de las indicaciones geográficas se haga de conformidad con dichos criterios y que facilite el entendimiento entre los Miembros en caso de discrepancias. El sistema previsto deberá tener en consideración las diversas modalidades de protección existentes en las legislaciones de los Miembros. Asimismo, tiene que contemplar la posibilidad de que los Miembros manifiesten reservas dentro de determinado plazo cuando no estén de acuerdo con proteger alguna indicación geográfica por considerar que no se ajusta a los criterios establecidos o por existir discrepancia sobre su origen. Se debe recordar que el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla la protección adicional de los vinos y bebidas espirituosas. En ese sentido, el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro que no contribuya a mejorar la protección de las indicaciones geográficas significaría reducir sustancialmente el nivel de protección ya negociado.

101. El representante de Australia dice que "system" (sistema) se define en el Collins English Dictionary como "a group or combination of interrelated, independent, or interacting elements forming a collective entity" (conjunto o combinación de elementos interrelacionados, independientes o interactuantes que forman una entidad colectiva). Por tanto, el término "system" (sistema) no podría equipararse a ningún elemento de sus partes constitutivas. Un "sistema" es un todo colectivo, interactuante cuyas distintas partes están interconectadas. En este caso en particular las funciones de notificación y registro son esas partes interconectadas. Su delegación no considera útil intentar equiparar el término sistema con ningún otro tipo de descripción cualitativa. Es más fructífero centrar la atención en el carácter y los objetivos de sus partes constitutivas y en su interacción. El Collins define "notification" (notificación) como: "1. the act of making an announcement or of making something known; notifying (el acto de hacer un anuncio o dar a conocer algo; notificar); 2. a formal announcement (anuncio formal); 3. something that notifies; a notice" (acción y efecto de notificar, aviso). El término "notify" (notificar) se define como: "1. to tell (comunicar); 2. to make known; announce" (dar a conocer; anunciar). En el contexto del sistema multilateral del que se ocupa este Órgano, la notificación es el acto de presentar, presumiblemente por escrito, al administrador del sistema una o más pretendidas indicaciones geográficas que un Miembro intenta incluir en el sistema. Por otra parte, "registration" (registro) se define en el Collins como: "1. the act of registering, that is of an entry being made, or state of being registered (acción y efecto de registrar, efectuar un asiento, o condición de registrado); 2. an entry in a register" (asiento en un registro). A su vez, "register" (registro) se define como: "1. an official or formal list recording names, events, or transactions (lista oficial o formal en que se enumeran nombres, eventos o transacciones); 2. the book in which such a list is written (libro donde se inscribe esa lista); 3. an entry in such a list ..." (rubro de esa lista). El diccionario Collins incluye un total de 15 acepciones del término "register" (registro), ninguna de las cuales hace referencia al concepto de efecto jurídico. Su delegación rechaza la afirmación de que, para ser congruentes con el mandato del párrafo 4 del artículo 23, el sistema de registro debe tener un efecto jurídico directo en las jurisdicciones nacionales. Su delegación discrepa de la afirmación que figura en el párrafo 29 del documento de las CE (JOB(02)/70) de que "el registro ... hace referencia a un modo específico de aplicar la prescripción contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, que se diferencia, por ejemplo, de los regímenes de derecho consuetudinario de carácter jurisprudencial". Esa interpretación implica un aumento del nivel de obligaciones y una restricción de los derechos de los Miembros con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El acto de "registro", a los efectos del Consejo en Sesión Extraordinaria, implica el acto de inscribir un término notificado en una lista establecida y mantenida con esa finalidad por el administrador del sistema multilateral. El acto del registro, efectuado por el administrador del sistema, es, por consiguiente, distinto del acto de la notificación realizado por un Miembro. Su delegación observa asimismo que, si bien el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere efectivamente en otras secciones al registro, estas referencias corresponden a los sistemas de registro nacionales y, en particular, a los derechos de propiedad intelectual, tales como marcas de fábrica o de

comercio, que de ordinario gozan de protección mediante el registro nacional. Es evidente que no sucede así con las indicaciones geográficas donde no se plantean cuestiones relativas a la territorialidad. Por consiguiente, no se cuestiona el derecho de cada Miembro a aplicar su propia legislación a fin de determinar la registrabilidad de la materia en cuestión. Queda claro que el Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros empleen diversos mecanismos para proteger las indicaciones geográficas y, por tanto, no sirve de nada intentar establecer una correlación entre las referencias al registro en las distintas partes del Acuerdo sobre los ADPIC. Los distintos contextos en los que se utiliza el término hacen que dicha comparación carezca de sentido. A juicio de su delegación, rara vez será necesario que una expresión notificada sea objeto de un examen preliminar antes de su inscripción en el registro. Tal vez tendría que preverse la posibilidad de negar el registro de nombres notificados dolosamente (por ejemplo, si un Miembro notifica el término "teléfono" como indicación geográfica para vino encabezado). Sin embargo, al margen de esa observación y debido al principio de territorialidad, no sería posible declarar con carácter definitivo si un término concreto se ajusta o no a la definición del párrafo 1 del artículo 22. Esto será una cuestión que cada uno de los Miembros deberá determinar.

102. Si se encomienda a la Secretaría de la OMC la responsabilidad de administrar y conservar el registro, también será necesario considerar cómo hay que abordar los costos de mantenimiento del sistema. Los Miembros no podrían soslayar el hecho de que el mantenimiento de un sistema multilateral tendría consecuencias financieras que deberían ser sufragadas de forma justa y equitativa. Esto tal vez podría lograrse mediante el cobro de una tasa al usuario, con lo cual el costo del sistema recaería en aquellos Miembros que utilizaran y, por lo tanto, se beneficiasen más del sistema. Nuevamente esta situación sería compatible con otros sistemas multilaterales análogos.

103. El representante de las Comunidades Europeas dice que en el párrafo 4 del artículo 23 se prevé el establecimiento de un sistema multilateral de "notificación" y "registro". A juicio de su delegación, la "notificación" sugiere que habrá una fase preliminar previa a la fase de registro. En ese sentido, la "notificación" sugiere claramente la existencia de una fase de presentación de solicitudes, que permitirá al órgano encargado del registro estar informado de la intención del solicitante de registrar un nombre. El "registro" hace referencia a un modo específico de aplicar la prescripción contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, que se diferencia, por ejemplo, de los regímenes de *common law* de carácter jurisprudencial. En los Estados Unidos, por ejemplo, la observancia de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y de la protección jurídica de las indicaciones geográficas se garantiza mediante el registro de nombres en forma de marcas de certificación. El registro suele traer aparejada la protección jurídica, incluso en un caso como el del sistema estadounidense de marcas de certificación, pero no en cambio en el de la propuesta presentada por los Estados Unidos y otros Miembros. Estos dos elementos del sistema multilateral deben quedar claramente diferenciados, al igual que las funciones y los efectos que corresponden a cada una de las dos fases del proceso. De las propuestas presentadas por las CE y sus Estados miembros y por Hungría se desprende que por notificación se entiende el proceso que abarca la comunicación y transmisión por los Miembros de la OMC participantes de sus indicaciones geográficas a efectos de su distribución a los Miembros de la OMC y el inicio del período de examen de esas indicaciones geográficas por los Miembros de la OMC. A su vez, por "registro" se entendería la terminación del proceso y la incorporación del nombre en el registro de la OMC junto con toda posible objeción formulada. En cambio, la propuesta presentada por el Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos (IP/C/W/133/Rev.1) no comporta en absoluto una distinción clara entre esas dos fases. En esa propuesta, la notificación y el registro constituyen una sola fase en la que todos los nombres que envíen las autoridades nacionales serán finalmente incorporados a una base de datos. Al parecer, la propuesta no intenta dar un significado diferenciado a esos dos términos.

104. La representante de la Argentina dice que los términos "notificar" y "registrar" se han de comprender en el marco de todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Un registro no debería imponer la aplicación de los criterios de elegibilidad del país que primero haya solicitado el

registro de una indicación geográfica en el registro multilateral. Si ello no fuera así, los Miembros deberían proteger automáticamente en su territorio las indicaciones geográficas incluidas en dicho sistema, con lo cual se desconocería o al menos tornaría inaplicable, la potestad que tiene cada Miembro de definir a nivel nacional las excepciones previstas en el artículo 24, las cuales no son susceptibles de definición general *a priori*, sino caso por caso de conformidad con la legislación nacional. El examen de las características, los procedimientos y los efectos legales mencionados en la nota del Presidente debería mantenerse en el contexto del objetivo y del párrafo 4 del artículo 23 y de los derechos y obligaciones comprendidos en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Los términos "notificar" y "registrar" deben interpretarse como elementos de un mismo acto: el Miembro que voluntariamente participe en el sistema notificaría sus indicaciones geográficas, las cuales serían incorporadas a un registro. En otros términos, el sistema debería consistir en un "registro de notificaciones" cuyo objeto será "facilitar" la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, en los términos del párrafo 4 del artículo 23, y no más allá.

105. Con relación a los costos, la oradora dice que es una cuestión de particular importancia para la Argentina y los países en desarrollo en general. No sólo debería abordarse desde el punto de vista del costo económico de mantener el sistema en la OMC, sino también desde la perspectiva de los costos que involucrarán a niveles nacionales, no sólo en cuanto recursos económicos sino a nivel de recursos humanos. A mayor complejidad del sistema, mayores serán los recursos económicos y humanos que deberán destinarse a nivel nacional de cada país y en la OMC. Su delegación no está de acuerdo en que el Consejo en Sesión Extraordinaria aborde en forma colectiva los "costos-beneficios" de los "distintos sistemas posibles". Sólo se podrían abordar colectivamente los costos económicos y de recursos humanos del sistema tanto a niveles nacionales o como a nivel de la OMC. La relación "costos-beneficios" debería ser una ecuación objeto de análisis a nivel nacional por parte de cada país, ya que dicha variable responderá a sus intereses. Teniendo presente que es difícil evaluar los costos en función de otros sistemas o de "sistemas posibles", la evaluación de éstos debería basarse en los dos sistemas propuestos hasta ahora. Sólo una evaluación de los costos permitiría luego a cada país analizar la variable "costos-beneficios" del sistema que se negocia.

106. La representante del Canadá dice que, contrariamente a lo que afirma el párrafo 32 del documento de las CE (JOB(02)/70), su delegación distingue entre "notificación" y "registro". Son dos pasos separados. La "notificación" es el primer paso. Corresponderá a cada Miembro la responsabilidad de identificar y presentar su lista de indicaciones geográficas nacionales, por ejemplo, a la Secretaría de la OMC. El registro constituirá el segundo paso del proceso: sería responsabilidad de la Secretaría de la OMC compilar una base de datos de todas las indicaciones geográficas notificadas, a fin de facilitar a todos los Miembros de la OMC el acceso a esa información. El "registro" de una indicación geográfica no debería interpretarse en el sentido de que impone una nueva obligación jurídica. El Canadá reconoce que ha sido útil dividir el párrafo 4 del artículo 23 para facilitar las deliberaciones en el Consejo en Sesión Extraordinaria. Sin embargo, opina que la expresión registro debería interpretarse en el contexto del artículo en su totalidad. La negociación de un sistema de notificación y registro no debería producir el efecto de aumentar las obligaciones contenidas en dicho artículo. En relación con la pregunta de la Presidencia acerca de si la Secretaría de la OMC o la Oficina Internacional de la OMPI podrían seguir contribuyendo a la labor del Consejo, su delegación estima que ambas organizaciones ya han aportado importantes contribuciones. Como consecuencia del mandato de Doha, se trata de completar las negociaciones antes de que se celebre la Quinta Conferencia Ministerial, pero siempre las contribuciones de ambas organizaciones serán bienvenidas.

107. La representante de Malasia, hablando en nombre de los miembros de la ASEAN, recuerda el documento IP/C/W/85, en el que la Secretaría preparó una reseña de los sistemas de registro internacional de indicaciones geográficas. Sugiere que el documento se actualice y se prepare un cuadro comparativo de los actuales sistemas; esta labor complementaría el cuadro comparativo preparado por las CE de las propuestas efectuadas. Recuerda que el documento de la Secretaría

menciona que hay varios sistemas de notificación y registro como el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo de Bangui. Cree que sería útil aprovechar esas experiencias. Un sistema multilateral, en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, debería ser un medio utilizado para facilitar la protección de las indicaciones geográficas en lugar de un fin en sí mismo. Por ello, los países de la ASEAN consideran que se debería crear un sistema sencillo que no impusiera nuevas obligaciones a sus Miembros, no ocasionara cargas financieras indebidas a los Miembros participantes ni gravara a los Miembros no participantes con obligaciones jurídicas o financieras.

108. El representante de Hungría dice que el mandato conferido por el párrafo 4 del artículo 23 distingue dos fases o pasos distintos destinados a servir propósitos diferentes. De los debates resulta evidente que hay ciertos elementos comunes o similares en los dos enfoques básicos presentados hasta ahora, pero también hay varias divergencias importantes. Su delegación estima que las semejanzas son más notables en lo relativo al elemento notificación de las dos propuestas básicas. No sería ni debería ser difícil superar las diferencias respecto del elemento notificación. La discrepancia básica entre los dos enfoques reside en el mecanismo y el efecto del registro. Observa que el registro en la "propuesta conjunta" (IP/C/W/133/Rev.1) sería automático y carecería de todo efecto jurídico real. Por consiguiente, es justo decir que no añadirá ningún valor significativo a la notificación. En verdad, ni siquiera se diferenciaría de ella. El acto de registro en el contexto del derecho de propiedad intelectual de ordinario supone un auténtico efecto jurídico; es probable que el mejor ejemplo sean las marcas de fábrica o de comercio y, en particular, las marcas de certificación, recomendadas por un Miembro como la forma más efectiva de conceder protección a las indicaciones geográficas. A falta de un efecto jurídico auténtico, el resultado final, como lo sugiere la propuesta conjunta, parece que no constituirá más que una mera base de datos o compilación de notificaciones. Su delegación está de acuerdo con los demás copatrocinantes del documento TN/IP/W/3 en que la facilitación de la protección legal debe surtir efectos más amplios que la mera reproducción de una lista de nombres con fines informativos. En otros términos, un sistema sin un elemento de registro efectivo no estaría en concordancia con el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. En este contexto, el orador solicita a los copatrocinantes de la propuesta conjunta que aclaren mejor la forma en que interpretan la palabra "registro" en el contexto de la propiedad intelectual.

109. Sobre la cuestión de los costos, dice que en el mundo ya casi no hay nada que sea gratuito y la OMC dista mucho de constituir una excepción. En la OMC no hay negociaciones que no impliquen costos. Los hay en relación con el proceso de negociación y también vinculados a la aplicación de los resultados. Ello es verdad en la esfera del Acuerdo sobre los ADPIC como en otros campos de negociación. Por consiguiente, carece de sentido hablar de costos en abstracto. Los costos siempre deben enfocarse en relación con los efectos del resultado. Un sistema que ayude genuinamente a los productores, consumidores y las administraciones a gozar de la protección prevista en el artículo 23 podría justificar con creces costos aún más elevados de aplicación que un sistema más barato que, en el mejor de los casos, no introdujera mayor confusión en la materia de la que ya hay en ella.

110. El representante de Suiza opina que el sistema multilateral que se ha de establecer debería prever un proceso de dos fases, lo que significa que debe haber una distinción entre las fases de notificación y registro. En cuanto a la fase de notificación, el nombre o la indicación que un Miembro desee proponer para que sea inscrito en el sistema multilateral ha de ser notificado. La notificación de un nombre o de una indicación genera un examen por parte de los Miembros. Los Miembros de la OMC deben tener la oportunidad de indicar al Miembro que haya notificado la indicación geográfica si hay elementos que impidan la protección de la indicación geográfica notificada en sus territorios, tales como las prescripciones de que se ha de cumplir la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, de que no se admiten las indicaciones geográficas homónimas engañosas, o de que el nombre notificado es una expresión genérica en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 24 o que está comprendido en cualquiera de las demás excepciones previstas en el artículo 24. A esos efectos, es fundamental disponer de un procedimiento para oponerse e impugnar las indicaciones geográficas notificadas. En cuanto al examen del nombre o la indicación, posterior a la

notificación, los Miembros deberían considerar también si sería útil que la autoridad o el "órgano" encargado de administrar el registro multilateral debiera efectuar un examen formal de las indicaciones geográficas notificadas. La segunda fase del sistema multilateral, el registro, sólo podrá realizarse después de la primera fase de notificación, examen y posible impugnación. El registro es la fase final del procedimiento e implica la inclusión de la indicación geográfica en el registro de la OMC, conjuntamente con las objeciones que se hayan dado a conocer. La distinción entre esas dos fases, como asimismo el examen y el procedimiento de impugnación, legitiman la inscripción en el registro multilateral.

111. El orador coincide con el representante de Hungría en que hay costos y beneficios involucrados en todas las cuestiones examinadas en el Consejo de los ADPIC. No sólo para establecer un sistema de notificación y registro, sino también, por ejemplo, en la esfera de los conocimientos tradicionales, en que se han presentado algunas propuestas innovadoras que implicarían ciertos beneficios y costos.

112. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación, en cuanto a los costos y beneficios, se asocia a las declaraciones de Hungría y Suiza. En respuesta a Australia sobre los costos de notificaciones y registros específicos que han de sufragar el usuario o el beneficiario, dice que su delegación no tiene una posición definitiva al respecto, pero reconoce que ese es un posible enfoque; en la próxima reunión presentará más ideas al respecto. Observa con asombro que un sistema de registro que produce efectos jurídicos constituya un problema para algunas delegaciones en la esfera de las indicaciones geográficas y no en la esfera de las marcas de fábrica o de comercio.

113. La representante de la Argentina solicita se aclare la vinculación hecha por algunas delegaciones entre el sistema multilateral previsto y los sistemas de registro de marcas de fábrica o de comercio. Según sus informaciones, fuera del sistema internacional administrado por la OMPI, los sistemas de registro de marcas de fábrica o de comercio son administrados a nivel nacional.

114. La representante de Australia se adhiere a la declaración formulada por la Argentina. No tiene sentido "comparar manzanas con naranjas", porque los Miembros de la OMC están obligados, por igual, a cumplir sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC tanto en materia de marcas de fábrica o de comercio como de indicaciones geográficas. En esa medida, hay un efecto jurídico igual que proviene de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no se puede hacer ninguna comparación entre el registro de marcas de fábrica o de comercio, efectuado por cada Miembro de la OMC a escala nacional, y la cuestión que el Consejo está examinando, que es un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Si se ha de hacer una comparación, sería más adecuado remitirse a algunos de los sistemas de registro de notificaciones de la OMPI en los que, a juicio de su delegación, no hay un efecto jurídico directo y cada país participante en esos sistemas conserva su derecho a determinar si concederá protección en su territorio.

115. La representante de Nueva Zelandia recuerda que, en relación con la cuestión de la definición, su delegación ha formulado varias preguntas acerca del efecto práctico y el ámbito de aplicación que resultarán de la utilización de la definición prevista en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. A falta de un mayor entendimiento sobre esa cuestión, su delegación estima difícil pensar con claridad en los efectos jurídicos, de haberlos, que se deriven del registro. En consecuencia, reitera las opiniones que expresó en el Consejo en sesión ordinaria, que están estrechamente vinculadas a los puntos planteados en el Consejo en Sesión Extraordinaria por Malasia, Australia y el Canadá.

116. El representante del Brasil manifiesta su sorpresa al escuchar la inclusión del "conocimiento tradicional" en las deliberaciones sobre la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Estima que las dos cuestiones son totalmente inconexas, excepto que se considere una posibilidad teórica de que las comunidades tradicionales tengan algunos vinos o



bebidas espirituosas que proteger. Recuerda que, en las sesiones ordinarias, observó que la protección del conocimiento tradicional por conducto de las indicaciones geográficas es tan ineficaz como su protección mediante otras formas de propiedad intelectual, como las patentes y el derecho de autor. De ningún modo la protección del conocimiento tradicional debe depender del registro, al menos en virtud de la legislación del Brasil. El conocimiento tradicional y las indicaciones geográficas deben permanecer separados.

117. El representante de los Estados Unidos dice que la práctica en otros órganos multilaterales es dejar los efectos jurídicos a cargo de los sistemas nacionales de los Miembros participantes en el sistema. No percibe ninguna incoherencia en la propuesta conjunta (IP/C/W/133/Rev.1), que simplemente propone que el efecto jurídico se rija por la legislación nacional de cada Miembro. Así es como se regulan todas las demás formas de propiedad intelectual en el contexto del sistema del Acuerdo sobre los ADPIC.

118. El Presidente dice que, como lo indicó en el párrafo 6 de su nota, podría ser útil pedir a la Secretaría de la OMC, con la colaboración de la Oficina Internacional de la OMPI, que facilite documentos fácticos relativos a los diferentes tipos de sistemas multilaterales de registro.

119. Así queda acordado.

#### *Participación*

120. La representante de la República Checa dice que los Miembros deberían tener la posibilidad de decidir si gozarán o no de los beneficios derivados del sistema. En este caso, es evidente que el sistema debería ser obligatorio para todos los Miembros participantes. No obstante, se deben fijar claramente las obligaciones que contraen los Miembros no participantes a fin de asegurar una facilitación efectiva de la protección.

121. El representante del Perú dice que el carácter voluntario del "sistema multilateral de notificación y registro" radica en el hecho de que no es indispensable que los Miembros incluyan sus indicaciones geográficas en tal registro, para que su protección sea obligatoria para otros Miembros, porque esa obligación emana directamente del Acuerdo sobre los ADPIC y no de la inscripción en el registro. El sistema debe garantizar la libertad de los Miembros de solicitar la inclusión de sus indicaciones geográficas en el sistema a fin de beneficiarse de la protección resultante. Sin embargo, una vez que las indicaciones geográficas hayan sido incluidas de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, deberán ser protegidas por los demás Miembros. Ello no significa que la protección de una indicación geográfica sea obligatoria por estar incluida en el registro, sino que está en el registro precisamente porque su protección es obligatoria en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

122. La representante de Australia dice que su delegación no ve tensión entre los conceptos de un "sistema multilateral" y un sistema relativo a indicaciones geográficas "que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema". Cualquier sistema de notificación y registro negociado en un órgano multilateral (el Consejo de los ADPIC) en virtud de un mandato incluido en un acuerdo multilateral (el Acuerdo sobre los ADPIC) y presuntamente previsto para ser administrado por una organización multilateral (la OMC) es, por definición, de índole multilateral; incluso si la participación en dicho sistema por parte de los Miembros de la OMC es voluntaria. Su delegación no considera que el uso del término "multilateral" en cambio de "plurilateral" por los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC deba interpretarse como que prevalezca sobre la intención clara de las palabras "los Miembros participantes en ese sistema". La oradora dice que en el momento de la redacción del párrafo 4 del artículo 23 era totalmente imposible predecir cuántos Miembros querrían participar en el sistema. Era perfectamente posible que todos los Miembros de la OMC optaran por participar y, por consiguiente, no habría tenido sentido excluir esta posibilidad

prejuzgando que el sistema sería plurilateral. En consecuencia, era lógico que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC eligieran el término "multilateral" en conformidad con el mandato multilateral y el carácter multilateral del foro de negociación. También era lógico que los redactores previeran que no todos los Miembros de la OMC estarían interesados en participar en un sistema que facilitara la protección de las indicaciones geográficas de los vinos (como disponía el mandato inicial del párrafo 4 del artículo 23) y, por consiguiente, estimaron conveniente disponer que el sistema fuera voluntario. A juicio de su delegación, el uso del término "multilateral" no tiene ninguna influencia sobre la cuestión de la participación en el sistema. Ello sería incompatible con otros sistemas de propiedad intelectual.

123. La representante de la Argentina dice que su delegación no ve ninguna tirantez entre los conceptos mencionados en el párrafo 7 de la nota del Presidente. El hecho de que el sistema sea multilateral no implica que pierda el carácter de voluntario, es decir que los Miembros expresen su consentimiento para participar o no en el sistema, que es lo que estipula el mismo párrafo 4 del artículo 23. El hecho de que sea un sistema multilateral no significa que surta efectos jurídicos sobre todos los Miembros de la OMC, incluidos aquellos que no dieron su consentimiento expreso para participar en el sistema. "Multilateral" significa que el resultado de negociaciones multilaterales debe ser un resultado acordado multilateralmente. El alcance y los efectos jurídicos del sistema no derivan del significado del término "multilateral"; están determinados en función de la "voluntariedad" de la participación en el sistema. Si el sistema es voluntario, es necesario el consentimiento de cada Miembro participante. Para los Miembros de la OMC las obligaciones derivadas del sistema deberán generarse a partir del otorgamiento del consentimiento de los Miembros a participar en el sistema.

124. La representante de Suiza señala que el hecho de que el párrafo 4 del artículo 23 requiera, por una parte, el establecimiento de un sistema multilateral y, por otra, se refiera a indicaciones geográficas "susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema" podría parecer a primera vista contradictorio. Una mirada más cercana mostrará que los Miembros de la OMC tienen la libre opción de beneficiarse del sistema multilateral y de participar en él mediante la notificación y el registro de sus indicaciones geográficas. No obstante, ese sistema sólo tiene sentido si, una vez que una indicación geográfica esté registrada en ese sistema multilateral, la indicación geográfica sea válida y vinculante para todos los Miembros de la OMC.

125. El representante de las Comunidades Europeas dice que en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se prevé un "sistema multilateral" y se contempla una protección para las indicaciones geográficas "que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema". Su delegación cree que, cualquiera que sea el sistema que las partes acuerden, éste debe darle sentido a ambos conceptos. Sólo se podría determinar el significado del término "multilateral" contrastándolo con la palabra "plurilateral". En el contexto de la OMC, se entiende por "plurilateral" un sistema en el que la participación es totalmente voluntaria, por ejemplo el Acuerdo sobre Contratación Pública. En cambio, por "sistemas multilaterales" se entienden los instrumentos que obligan u obligarían a todos los Miembros. De la expresión "que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema" se desprende que se trata de un sistema en el que los Miembros podrían participar libremente si desean que sus propias indicaciones geográficas gocen de los beneficios del mismo. Las propuestas formuladas por las CE y sus Estados miembros y Hungría procuran establecer un equilibrio a tal respecto pues en ellas se prevé que algunos de los efectos del sistema se harán extensivos a todos los Miembros y otros quedarán en cambio circunscritos a los Miembros participantes. Esas dos propuestas propugnan la idea de que los Miembros participantes establezcan una presunción de validez de las indicaciones geográficas notificadas y no impugnadas. Con arreglo a la propuesta de las CE, por ejemplo, las indicaciones geográficas notificadas y no impugnadas no verían su protección rechazada en todos los Miembros por varios motivos. La propuesta presentada por el Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos también parece hacer una distinción similar entre Miembros participantes y no participantes, pues de ella se deduce que las autoridades de los Miembros participantes "deberán" remitirse a la lista mientras que las de los

Miembros no participantes "serán libres" de remitirse a ella, pero se trata de una distinción que desaparece en la práctica dado que no hay ningún mecanismo para supervisar si las autoridades nacionales se remiten o no a esa lista.

126. La representante de Nueva Zelanda dice que su delegación no ve ninguna contradicción entre los dos conceptos. Como las CE lo han señalado en otra negociación en las que son los proponentes principales, la de la relación entre la OMC y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, un elemento que se ha de considerar para evaluar si un tratado es un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente es que el acuerdo deberá estar abierto a la adhesión de cualquier Miembro de la OMC. La oradora remite a los Miembros al documento TN/TE/W/1, "Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA): Aplicación del Programa de Doha para el Desarrollo". Su delegación estima que ese concepto sería útil en las deliberaciones del Consejo en Sesión Extraordinaria. Precisamente porque la participación en el acuerdo es voluntaria, éste no se aparta de su carácter multilateral. El concepto fundamental es la apertura para adherirse si uno lo desea. Con respecto a la aplicación de los efectos a los Miembros de la OMC, las CE han señalado en su propuesta que algunos de los efectos del sistema serían aplicables a todos sus Miembros, sin tener en cuenta si han optado por adherirse al acuerdo. Esta propuesta excede del concepto de voluntariedad y su delegación no puede aceptarla. Discrepa del criterio de que algo es multilateral sólo si todos los Miembros de la OMC quedan obligados por sus efectos.

127. La oradora observa que en uno de los documentos de las CE se plantea una pregunta pertinente con respecto a si los países menos adelantados participarían en el sistema. Dice que en la actualidad no se exige a los países menos adelantados que concedan la protección prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC a las indicaciones geográficas, ni que asuman ninguna de las obligaciones dimanantes del párrafo 4 del artículo 23. Por consiguiente, los países menos adelantados no se ajustan a la prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC de que la protección nacional de las indicaciones geográficas sea un requisito previo de la protección en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Su delegación no comprende por qué las obligaciones que dimanen automáticamente de la propuesta de las CE para todos los Miembros deberían aplicarse también a los países menos adelantados. Sin embargo, considera que los Miembros deben oír lo que tienen que decir sobre ese punto los propios países menos adelantados, ya que son ellos los que mejor conocen su capacidad para sufragar las cargas del sistema. Con respecto a la participación de las CE y sus Estados miembros en el sistema de registro definitivo, la oradora pregunta si, en el marco del registro, los distintos Estados miembros de las CE notificarían los términos protegidos en sus respectivos países o si habría una sola notificación para las CE en su totalidad, o ambas cosas. Esta es una importante distinción ya que, como los Miembros se enteraron en el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria, no hay necesariamente acuerdo entre todos los Estados miembros de las CE en cuanto a términos concretos. En la medida en que la situación se refiere a los vinos, su delegación no está segura si un Estado miembro podrá, por ejemplo, presentar un término al registro multilateral que no esté protegido a escala de las CE. ¿Se exigiría entonces a otros Miembros que dieran protección a ese término?

128. La representante de Malasia, hablando en nombre de los miembros de la ASEAN, dice que queda claro que las negociaciones deben tener lugar en el Consejo de los ADPIC. Por ello, todos los Miembros de la OMC y los gobiernos en proceso de adhesión deben poder participar en las negociaciones encaminadas a establecer el sistema multilateral. En función de la participación, parece que los Miembros con indicaciones geográficas susceptibles de protección deben tener la oportunidad de señalar su opción de participación. En cuanto a los que no tengan indicaciones geográficas que proteger, no está claro cómo podrían participar en ese sistema. Éste seguiría siendo multilateral en el sentido de que todos los Miembros tendrían oportunidad de participar en las negociaciones para establecer el sistema que estaría abierto a la participación de todos los Miembros.

129. El representante de Hungría dice que los Ministros en Doha confirieron el mandato de completar la labor iniciada en el marco del párrafo 4 del artículo 23 y de establecer un sistema

multilateral de notificación y registro a más tardar para la Quinta Conferencia Ministerial. Su delegación confía en que el mandato refleje el deseo común de todos los Miembros de la OMC de participar en el sistema. Su delegación prefiere tener un sistema en el que participen todos los Miembros de la OMC. La mejor manera de resolver la tensión percibida entre los conceptos en cuestión sería establecer un sistema con una participación plena.

130. El representante de los Estados Unidos dice que el término "equilibrio" se suele plantear en el Consejo, sobre todo con respecto a las indicaciones geográficas. Está impresionado por la evaluación de las CE sobre el equilibrio adecuado en ese contexto. En lo concerniente a la participación, la idea del equilibrio de las CE es que los Miembros participantes en el sistema tengan derechos y obligaciones, pero que los Miembros que opten por no participar en el sistema no tengan derechos sino sólo obligaciones. Por otra parte, la participación prevista en la propuesta conjunta prevé un efectivo equilibrio. Ella refleja el carácter voluntario del sistema tal como lo prescribe el párrafo 4 del artículo 23. Para los que opten por participar en el sistema hay derechos y obligaciones y, para los que no participen, no los hay. La propuesta de las CE parece poner en duda el valor del registro previsto en la propuesta de los Estados Unidos. Pregunta cuál es el valor de la propuesta de las CE en función de su legislación interna. Si el nombre de un lugar de los Estados Unidos para un vino o una bebida espirituosa se registra e ingresa sin oposición en el sistema multilateral propuesto por las CE, ¿gozaría automáticamente de protección en virtud de los reglamentos europeos?

131. La representante de Australia dice que los Miembros deben comprender claramente cómo será el sistema, se denomine "plurilateral" o "multilateral". Si un Miembro no tiene interés en proteger una indicación geográfica de vinos y bebidas espirituosas, ni desea siquiera hacerlo, estará obligado, sin embargo, a menos de que goce del beneficio del trato especial y diferenciado, a establecer un mecanismo para un sistema de protección de las indicaciones geográficas de otros Miembros. Esta situación plantearía el problema de un equilibrio adecuado.

132. El representante de las Comunidades Europeas dice que el concepto de "equilibrio adecuado" es interesante. No comprende dónde estaría el equilibrio "adecuado" en la propuesta del Canadá, Chile, el Japón y los Estados Unidos.

133. El representante del Senegal dice que se conoce la posición de las CE sobre la participación de los países en desarrollo y la asistencia técnica que podrían prestar la OMC y la OMPI. Recuerda también la Iniciativa conjunta de la OMPI y la OMC de cooperación técnica para países menos adelantados con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC. Su delegación tiene un interés especial en la protección, ampliación y utilización de las indicaciones geográficas. Observa que los países menos adelantados, como Nueva Zelandia ha comentado, no están obligados a cumplir ninguna de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC pero, habida cuenta del interés comercial de las indicaciones geográficas, esa protección sería importante en la esfera del acceso a los mercados. En ninguna parte del documento presentado por las CE y sus Estados miembros hay alguna referencia al trato especial y diferenciado como el que figura en los Acuerdos de la OMC. La participación de los países en desarrollo y, más específicamente de los países menos adelantados, suele estar condicionada a la existencia del trato especial y diferenciado. En el futuro, podría hacerse una referencia específica al trato especial y diferenciado. Recuerda que los miembros de la OAPI, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual de habla francesa, tienen una sola Ley de propiedad intelectual y, en el Acuerdo de Bangui, que es la fuente de esa Organización, hay una sección especial sobre indicaciones geográficas. Su país tiene interés en la materia aun cuando por ahora no se encuentra en el nivel de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC.

134. El representante de las Comunidades Europeas, en respuesta a la pregunta planteada por la delegación de los Estados Unidos, dice que los efectos del registro en el marco del sistema de la OMC sólo son los que los Miembros de la OMC acuerden, es decir, únicamente los que estén directamente relacionados con el registro de la OMC. Refiriéndose a una observación de la delegación de los

Estados Unidos, de que los efectos del registro con arreglo a lo dispuesto en su propuesta serían decididos a escala nacional, pregunta si esa propuesta implicaría que una indicación geográfica registrada por las CE se convertiría en una marca de certificación en los Estados Unidos.

135. El representante de los Estados Unidos, en respuesta a la pregunta de las CE, dice que, de conformidad con la propuesta conjunta, los Miembros tendrían que solicitar, por conducto de la legislación nacional, la protección jurídica para una indicación geográfica. Si se juzga que una indicación geográfica concreta notificada por las CE satisface las normas de la legislación estadounidense, las CE podrían obtener la protección para su indicación geográfica en virtud del sistema de los Estados Unidos. Pregunta si el representante de las CE podría confirmar si, conforme a su propuesta, una indicación geográfica estadounidense sería registrada a los efectos de gozar de protección en las CE si no fuera impugnada a través del sistema multilateral propiciado por las CE. En otras palabras: ¿qué gestiones deberían realizar los Estados Unidos, en el contexto del sistema multilateral, a fin de obtener protección para indicaciones geográficas estadounidenses de vinos y bebidas espirituosas de conformidad con los reglamentos de las CE sobre indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas?

136. El representante de las Comunidades Europeas reitera sus observaciones previas de que el registro multilateral no reemplazaría a los sistemas de registro nacionales. Por consiguiente, son diferentes los efectos del registro en el plano nacional y a escala multilateral. Los efectos atribuidos al registro a escala multilateral son los efectos que se especifiquen en el establecimiento del registro. Los efectos de un registro nacional son los que decide la legislación nacional. Si los Estados Unidos registraran una indicación geográfica de vinos y bebidas espirituosas, se beneficiarían de la presunción de validez correspondiente al sistema multilateral de registro. Por ejemplo, si los Estados Unidos o el titular del derecho litigaran ante tribunales europeos, se beneficiarían de la inversión de la carga de la prueba. Le incumbiría al tercero que utilizara el nombre estadounidense demostrar que el nombre es, verbigracia, un nombre genérico o acogerse a cualquier otra excepción. Ése sería el efecto del sistema multilateral de registro. Si el titular del derecho estadounidense solicitara protección en virtud del sistema de las CE para los vinos y bebidas espirituosas, se beneficiaría de una protección "ADPIC plus" que las CE conceden a sus titulares de derechos. En otros términos, se beneficiaría de mecanismos especiales de observancia que no son obligatorios en el Acuerdo sobre los ADPIC.

#### *Observaciones finales del Presidente*

137. El Presidente, antes de resumir las deliberaciones sobre los temas, recuerda que el mandato del Consejo en Sesión Extraordinaria es claro: "negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial". El Consejo en Sesión Extraordinaria debe cumplir ese mandato en su integridad y no sobrepasarlo. Si el mandato plantea problemas a alguna delegación, el Consejo en Sesión Extraordinaria no es el foro adecuado para examinar esas dificultades. El problema tendría que tratarse en un nivel superior o en la próxima reunión a nivel ministerial.

138. Con respecto al debate sobre la definición de la expresión "indicaciones geográficas" y la posibilidad de incluir las indicaciones geográficas en el sistema, el Presidente dice que el Consejo en Sesión Extraordinaria ha realizado deliberaciones útiles sobre las cuestiones de la definición y la elegibilidad que señalan algunas esferas de criterios comunes, así como ciertas diferencias de enfoque que tendrán que seguir examinándose. En cuanto a los puntos en que hay un criterio común, no advierte que ninguna delegación ponga en duda que la definición de indicaciones geográficas que debería utilizarse sea la contenida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tampoco advierte ningún desacuerdo con la propuesta de que, para determinar la elegibilidad, las excepciones previstas en el artículo 24 serían pertinentes. Ello incluye la idea de que, para poder

incluirse en el sistema multilateral de notificación y registro, una indicación geográfica debería gozar de protección en su país de origen.

139. Una cuestión en la que parece haber algunas diferencias de enfoque es la relativa a la forma de abordar las diferencias en la interpretación de los términos que quedan comprendidos en la definición del párrafo 1 del artículo 22 y que podrían ser susceptibles de inclusión en un sistema multilateral de notificación y registro. Un enfoque ha consistido en preconizar un grado mayor de entendimiento común acerca de lo que hay que abarcar, en lugar de depender de las diferencias que se han de resolver caso por caso en la aplicación del sistema. A ese respecto se han planteado varios asuntos concretos. El otro enfoque ha hecho mayor hincapié en los asuntos que se han de abordar en la observancia del sistema. En ese segundo enfoque advierte también algunas diferencias significativas de énfasis. Algunos han destacado la importancia de los mecanismos de impugnación u oposición como una forma de abordar esos problemas, en tanto que otros han opinado que esas cuestiones deberían tratarse exclusivamente en el marco de la legislación y los procedimientos nacionales.

140. Sin embargo, aun frente a la cuestión de cómo se han de abordar las diferencias de criterio acerca de los requisitos que se han de reunir para gozar de la protección como una indicación geográfica, estima que los Miembros podrán coincidir en que las autoridades nacionales son, en última instancia, las que han de determinar si un término concreto satisface los criterios de la legislación nacional que, por cierto, deben ser compatibles con las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

141. En relación con las deliberaciones sobre la finalidad del sistema de notificación y registro, el Presidente dice que, una vez más, percibe cierto fundamento común. Las delegaciones que han hecho uso de la palabra sobre la cuestión han opinado que la finalidad del sistema multilateral no debe ser mejorar el nivel de protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, sino facilitar la obtención de ese nivel de protección. Asimismo, tiene entendido que todas las delegaciones reconocen que, al proceder así, deben seguir siendo válidas las excepciones estipuladas en el artículo 24. Sin duda, como siempre el demonio está en el detalle, pero piensa que sería útil para el proceso que se desarrolla en el Consejo en Sesión Extraordinaria que hubiese acuerdo en principio sobre lo que ha mencionado.

142. Observa que hay un par de puntos más específicos que podrían merecer un examen más detenido. El primer punto se refiere a lo que significa todo aquello con respecto al párrafo 1 del artículo 24. El otro es si la protección que debería facilitarse es sólo la prevista en el artículo 23, o si también debería facilitarse la protección prevista en el artículo 22.

143. En cuanto al debate sobre qué se entiende por "sistema de notificación y registro", el Presidente dice que las delegaciones parecen estar muy distantes, incluso a nivel de principio, sobre lo que se entiende por sistema de notificación y registro. El meollo de la diferencia parece ser el sentido y la importancia del concepto de "registro" en el contexto de las indicaciones geográficas y del Acuerdo sobre los ADPIC. Sigue pensando que los Miembros deben encontrar formas para darle al debate una base más empírica. Por cierto que hay muchos otros aspectos de la mecánica de un sistema multilateral de notificación y registro que requieren un examen exhaustivo, y en ello se centrarían las deliberaciones en la reunión de septiembre.

144. Con respecto al debate sobre la participación, el Presidente estima que esta es una cuestión en la que nuevamente las opiniones parecen divididas, sobre todo en cuanto a las posibles consecuencias para los Miembros que no participen en el sistema. Podría ser que esta cuestión se tratara mejor en una fase posterior, cuando los Miembros tengan una idea más clara de las características del sistema y de los efectos potenciales para los países no participantes.

D. OTROS ASUNTOS

145. El Presidente dice que, en la reunión de septiembre, los Miembros podrán analizar las cuestiones relativas a la mecánica como se reseña en el párrafo 8 de su nota, con inclusión de asuntos tales como los procedimientos de notificación, oposición, registro y modificación, así como los problemas de costos y la posible función de la Secretaría, teniendo en cuenta las diversas propuestas que ya se han formulado y las propuestas nuevas o modificadas. El Consejo en Sesión Extraordinaria podría también proseguir el debate de los cuatro puntos ya examinados, así como realizar un análisis preliminar de las propuestas nuevas o modificadas que pudieran presentarse. Para la reunión de noviembre, podría preverse continuar el debate de las cuestiones examinadas en las reuniones de junio y septiembre, así como un análisis detallado de las propuestas. Como se ha indicado en los párrafos 3 y 8 de su nota, estas sugerencias no han de ser óbice para que cualquier delegación plantee en cada reunión cualquier cuestión pertinente.

146. Con respecto a la presentación de propuestas, recuerda a las delegaciones que la fecha indicativa sugerida para las presentaciones es la reunión de septiembre. Confía en que esas propuestas podrían hacerse en esa oportunidad a fin de facilitar los debates.

---